

PODER JUDICIAL□□□□□□

CHILE□□□□□□□□

IQUIQUE, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, compareció ante este Tribunal doña MARIA ALEJANDRA BUSTAMANTE TAPIA, Ingeniera Civil Industrial, con domicilio en Avenida 4 Sur 2621, departamento 1704 de esta ciudad, quien deduce denuncia tutelar por vulneración de garantías constitucionales y actos de discriminación, todo con ocasión del despido y demanda de cobro de prestaciones y nulidad del despido, en contra de la CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, persona jurídica del giro de su denominación, representada por CESAR REINALDO VILLANUEVA VEGA, Director Regional Corfo Tarapacá, ambos con domicilio en calle Simón Bolívar N° 202, piso 12, Edificio Finanzas, de esta ciudad.

□Relata que con fecha 29 de Diciembre de 2006, suscribió un contrato de trabajo con el Comité Innova Chile, organismo técnico que integra y depende de la Corporación de Fomento de la Producción o Corfo, pacto que comenzó a regir el día 01 de Enero del año 2007, desempeñándose como ejecutiva de proyectos en Innova Chile, cargo en el que se le asignó el grado 9. En el ejercicio de sus funciones, le correspondía orientar a distintos emprendedores sobre los fondos de Corfo, presentar proyectos técnicos ante los órganos definidos y realizar seguimiento técnico a éstos para su aprobación y posterior asignación. Con fecha 01 de Junio del año 2011, avanzó a grado 8 en la escala de funcionarios, con las mismas funciones y posteriormente, con fecha 31 de Diciembre del año 2014, se modificó el contrato de trabajo en el sentido que comenzó a prestar servicios directamente para la denunciada CORFO en esta región de Tarapacá.

Luego, con fecha 01 de marzo de 2016, nuevamente se modificó el contrato de trabajo, estableciéndose nuevas funciones como Coordinadora de Administración y Control de Gestión, volviendo a sus funciones de ejecutiva técnica con fecha 01 de Abril de 2019.



Agrega que el inicio y termino de la jornada ordinaria fue flexible en el sentido que el ingreso se estableció entre 8:30 a 10:00 am y dependiendo de la hora de ingreso, la salida entre 17:30 a 19:00 de lunes a jueves y salida de 16:30 a 18:00 hrs los días viernes y su remuneración se encontraba integrada por distintos ítems que se desglosan de la siguiente manera: a) Sueldo base \$477.053.-; b) Asignación especial \$2.253.455.- además de la asignación e incentivos que recibía cada tres meses por c) asignación de modernización \$1.043.916.-; d) Incentivo colectivo \$556.752.- y e) Incentivo institucional \$528.918.-, lo que significaba que cada tres meses percibía la suma mensual de \$4.860.094.-, pero la remuneración bruta mensualizada (promedio de los tres meses) corresponde a \$3.440.370.-

Explica que en su calidad de Ingeniero Civil Industrial y como consecuencia de los 14 años de servicio que prestó a la denunciada, recibió capacitación y una vasta experiencia en distintos ámbitos, principalmente en el área de innovación (con diplomados y magister en innovación) así como también en el área de la administración (con un diplomado en control de gestión), debiendo agregar las distintas capacitaciones en las que se nutrió durante la vigencia de la relación laboral. Afirma que fruto de su experiencia, profesionalismo, desempeño, esmero y probidad es que continuamente fue calificada con un factor de 9 o más, en circunstancias que la nota máxima es 10, manteniéndose en lista 1 en cada período calificadorio.

Explica como contexto dentro del cual se realiza el despido, describiendo lo ocurrido desde el año 2018 en adelante, por cuanto durante esa fecha en adelante habrían ocurrido una serie de irregularidades en la institución que terminaron en el despido arbitrario de la ex abogada regional y denuncias ante la Contraloría, además de dos juicios de tutela de derechos fundamentales que conoció esta misma judicatura laboral y cuyos efectos habrían repercutido en la actora.

Así, con fecha 18 de Junio de 2018, asumió como nuevo Director Regional de Corfo Tarapacá, el sr. César Villanueva Vega, a quien le solicitó que le cambiara de funciones por la de ejecutivo técnico, petición que se materializó mediante modificación de contrato suscrito con fecha 01 de Abril de 2019, solicitud que fue motivada por cuanto: 1.- En una ocasión le comentó que la mayoría de sus ex colegas le mencionaron que ella tenía mal trato y enviaba mails muy prepotentes (cuando era



Coordinadora de Administración y Control de Gestión C Administración), por lo que quedó muy extrañada y le pidió que indicara quienes eran esa mayoría de funcionarios y le mostrara los correos, para corregir y pedir las disculpas del caso sin recibir ninguna información ni antecedentes concretos. 2.- Luego, en otra reunión sostenida en su oficina, le preguntó cómo conocía al Intendente de la Región de Tarapacá, sr. Miguel Angel Quezada, porque él le había “puesto mucho piso”, es decir, había hablado muy bien de ella profesionalmente, y le dijo textual “yo pensaba que habías tenido algo con él”, lo que le provocó un gran impacto y se sintió menospreciada, al punto que sólo pudo responder que estaba equivocado. 3.- De regreso a sus funciones de ejecutiva técnica, en la Dirección Regional, sucedieron hechos irregulares en las presentaciones de algunos proyectos, específicamente en cambios de decisiones sobre aprobar o rechazar los mismos, al margen de la evaluación de la ejecutiva técnica a cargo del mismo. Así, a raíz de la “solicitud” del Director Regional para que llevara a rechazo un proyecto con buena evaluación por parte de su ejecutiva técnica, srta. Carolina Barrera Díaz, se generó una serie de acontecimientos que resultaron en el despido intempestivo e injustificado de la abogada de la Dirección Regional y en dos demandas de tutela de derechos fundamentales deducidas por la primera y por la srta. Carolina Barrera Díaz en contra de Corfo.

Relata que el despido de la abogada se concretó en mayo de 2019, lo que motivó una denuncia ante la Contraloría y que en Agosto de ese año, la prensa local dio cuenta de una serie de hechos irregulares. A raíz de lo anterior, el 16 de agosto de 2019, 13 de los 16 funcionarios de la Corfo Tarapacá emitieron una declaración pública, supuestamente apoyando la gestión del Director Regional, declaración que no firmó pese a que habría sido interpelada formalmente por parte del Subdirector regional, Sr. René Fredes Ramírez.

Posteriormente, el día 21 de agosto del mismo año, recibieron un correo de parte del Director Regional, César Villanueva Vega, agradeciendo públicamente a los funcionarios de Tarapacá por la declaración emitida, correo que venía en respuesta, a correo enviado por el subdirector René Fredes Ramírez, indicándole textual “Adjunto a Ud. Declaración pública de apoyo a su gestión suscrita de manera “espontánea” y “voluntaria” por 13 de los 16 funcionarios de nuestra Dirección Regional”.



Continúa con que el 16 de Septiembre de 2019, recibió un correo del Director Regional por una carta ingresada por un consultor del DFL 15 (programa ejecutado por Corfo), indicando su preocupación por una supuesta carpeta extraviada y molestia del consultor, Sr. Jorge Claire, por una respuesta en que se indicó que vería todo después de las fiestas patrias porque no habría personal en la Dirección Regional, señalando que en la misma fecha le dio respuesta vía correo electrónico. Luego, habiendo transcurrido sólo 15 minutos, el Director Regional, envía correo a todos los funcionarios, indicando: *“Agradeceré evitar situaciones informales para evitar este tipo de acontecimientos, y de sobre manera tendré en cuenta que el suscrito sólo se le informe formalmente de antecedentes o situaciones relevantes, que sean de mi competencia y que deba por normativa orgánica estar en conocimiento. Situaciones de carácter personales o derechamente fuera de normas, no se puede hacer cargo ya que no está en antecedentes”*.

Luego el 23 de octubre de 2019, recibió un mail del Director Regional con copia a toda la Dirección Regional, indicándole: “Alejandra, todas las gestiones de los ejecutivos deben ser vista directamente con el Subdirector, por tanto ruego dar estricto cumplimiento a esta indicación, no revisaré nada de forma directa sin previo VB del Subdirector. Del mismo modo agradeceré que cuando sea René quien solicite alguna gestión, le respondas a él como jefatura directa de cada ejecutivo. Copio a la DR para estar en conocimiento del cómo proceder”.

Continúa con que el Jueves 19 de Diciembre de 2019, debió visitar una empresa en la comuna de Alto Hospicio y el Director Regional tenía que asistir al Consejo Regional y como existían dos vehículos institucionales pero un solo chofer, fue a conversar con el Director para solucionar el problema y pedirle que el chofer le llevase a la visita, pues la empresa se encontraba en un lugar apartado y por seguridad, prefería ir acompañada, máxime si se desplazaba en el vehículo de Corfo. Frente a su requerimiento, el Director le responde que no se preocupe que llamaría a Andrés Leyton, periodista de la Dirección Regional, para que lo llevara en el otro vehículo. Por tanto, ello se lo comentó al conductor y éste le llevó a destino, sin embargo, a los minutos recibe un mail del Director Regional, dirigido a Raúl Guzmán, Jefe de administración y Control de Gestión y al Subdirector con el siguiente tenor: *“René, Raúl: Consultar si administrativamente existe algún requisito de que los ejecutivos*



deben manejar el vehículo para sus visitas, me caracterizo por no utilizar a Juan (chofer) pero es complejo tener que adaptarme en fechas tan importantes (estoy a la espera de la llamada del CORE para presentar la tercera modificación de FIC) y estacionar es un caos. Me iré en Uber, pero no me sirve que los ejecutivos no manejen. Favor puedes averiguar”.

En marzo de 2020, a raíz de la demanda laboral interpuesta por la ejecutiva técnica, doña Carolina Barrera Díaz, fue citada a través de carta certificada CC-596/2020, a declarar como testigo en la causa RIT T-253-2019, caratulada “BARRERA con CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN” a la audiencia de juicio programada para el día 11 de marzo de 2020, a las 10:30 horas, en el Juzgado de Letras del trabajo de Iquique, a la cual acudió como testigo, aunque no rindió efectivamente declaración.

A fin de mayo de 2020, en sus funciones como encargada de la ejecución del DFL 15, se le presentó una situación con uno de los empresarios, quien solicitaba una bonificación de sus inversiones por \$30.000.000.-, el cual de acuerdo con las bases debía ser rechazada por no cumplir con ciertos requisitos en relación con los bienes ingresados al ciclo productivo; debido a lo anterior, recibió un llamado del Director Regional Corfo Tarapacá, Cesar Villanueva Vega, consultándole las razones de este rechazo y le explicó su análisis, a lo cual le dice telefónicamente que “*prácticamente me estoy metiendo en temas que no me competen y que sólo se le debe pedir al empresario una Declaración jurada indicando que, si son nuevos*”, sin perjuicio que la documentación de respaldo con que contaba le indicaba todo lo contrario. Señala que a raíz de que no se podría aceptar la declaración jurada, el Director le pidió convocar un Comité Resolutivo para ver este asunto, Comité compuesto por el Seremi de Economía, Seremi de Desarrollo Social, el Director Regional y tres representantes del sector privado, donde expuso el asunto, el Comité no tomó una decisión y solicitó pedir información al empresario por carta que fue enviada con fecha 02 de Junio de 2020 y con fecha 06 de Junio de 2020, el empresario respondió la misiva y expuso claramente que los bienes no eran nuevos, como lo exigían las bases, pero a pesar de ello, el Director Regional pidió que la Tesorería Regional hiciera su análisis, con el mismo resultado de rechazo. Finalmente, el 08 de Julio de 2020, se realizó nuevamente el comité resolutivo del DFL 15 para rechazar la



devolución solicitada por el empresario, comentando la actora que por lo anterior se tardaron cerca de 1 mes y medio en resolver este conflicto, con todo el trabajo extra administrativo y la demora para pagar otros proyectos.

Continúa con que en el mes de Junio de 2020, estaba trabajando en los proyectos del instrumento Semilla inicia convocados por Concurso FIC 2019, instrumento que busca apoyar a emprendedores que cuenten con negocios de alto potencial de crecimiento, mediante el cofinanciamiento de actividades para la validación técnica y comercial del emprendimiento, además de dar acceso a servicios de apoyo para su implementación y desarrollo. En este proceso, los ejecutivos realizan una primera evaluación de pertinencia, de ahí un proceso etapa 1 de cumplimiento de algunos requisitos de un video de presentación y posteriormente la etapa 2, que es la evaluación técnica que se rige por una pauta de criterios indicados por bases. Previo a la presentación de los proyectos al Comité de Asignación Regional Norte (CAR Norte), representado por los 5 directores regionales de Arica hasta Coquimbo, y tres consejeros de Corfo Central, se realizan dos pre-comité, uno interno de la Dirección Regional, denominado Comité de ejecutivos regionales (CER) y un Precomité con los ejecutivos técnicos de las 5 primeras regiones que componen el Comité de Asignación, con el fin de retroalimentar las evaluaciones, y del cual se genera un documento con los “comentarios” que se deben responder en la ficha final de evaluación. El comité se realizaría el 05 de Junio de 2020, las fichas de esos proyectos habían sido enviadas el día 03 de Junio del mismo año, sin embargo, el día 04 recibió un mensaje a través de WhatsApp por parte del Director Regional de Corfo Tarapacá, Cesar Villanueva Vega, indicando textual: “que había revisado el ranking del proyecto, y que había bajado la nota, ¿qué había pasado?”, luego de ello, el Director Regional le preguntó por las razones de la nota y el porqué de su criterio para calificarlo de esa forma, en circunstancias de que él tenía otra opinión favorable al mismo. Inmediatamente después recibió una llamada del empresario cuyo proyecto estaba calificando a quien le explicó las razones técnicas del rechazo, manteniendo su evaluación.

Luego comenzó el proceso de la presentación de los proyectos del concurso FNDR de prototipos de innovación social, durante el mes de Octubre de 2020, instrumento que cofinancia la cocreación de innovaciones en productos, procesos, servicios y/o



nuevas prácticas orientadas a generar el impacto social en la región de Tarapacá, de acuerdo con los desafíos priorizados. El proyecto código 20IS-143573, que evaluó y quedó por sus calificaciones en el N° 1 del ranking, con nota 4,3 y buenos comentarios, fue recomendado a rechazo por el Director Regional Corfo Tarapacá, Cesar Villanueva Vega, señalando que el postulante había recibido financiamiento en el mismo concurso el año 2018, y que su acuerdo con los Consejeros Regionales era no volver a financiar las mismas empresas. Sostiene que, fuera de todo protocolo, se recomienda rechazar una postulación que tiene mérito técnico y que cumplía con todos los requisitos de financiamiento, sólo por razones arbitrarias e irregulares. Finalmente, y luego de 30 minutos de deliberación, los consejeros (del Comité) presentes dieron su recomendación positiva para aprobar el proyecto, a pesar de las insistencias del Director Regional de rechazar la postulación, siendo la abogada secretaria del CAR, la que debió explicar al Director Regional que las razones para rechazar un proyecto son exclusivamente técnicas.

Luego de que finalizara el Comité, a los días recibió un correo del Subdirector Regional, sr. René Fredes Ramírez, informándole que el referido proyecto sería reasignado a otro ejecutivo para seguimiento técnico, decisión que califica como no justificada, pareciéndole una especie de castigo por cumplir con su trabajo.

Transcurrido el tiempo y bajo una relación laboral hostil y a pesar de encontrarse trabajando vía telemática durante la mayoría del año 2020, con fecha 18 de enero de 2021, el mismo Director Regional, a través de una videoconferencia, en la cual participaba el Subdirector Regional, el Jefe de Administración y el abogado, le notifican su desvinculación indicándole que estaba despedida por la causal de necesidades de la empresa.

De acuerdo a los hechos relatados, afirma que sufrió acoso laboral durante la vigencia de la relación laboral y, además, se configuraría al momento del despido una suerte de castigo por parte del empleador por haber sido incorporada como testigo en la causa de la srta. Carolina Barrera Díaz.

Sostiene que a partir de la llegada del sr. Villanueva en el año 2018, se generó un ambiente hostil en la Dirección Regional, por cuanto el actuar arbitrario de la jefatura generaba malos tratos y roces continuos cuando realizaban su trabajo acorde a los



criterios técnicos y legales que rigen la calificación de los proyectos sujetos a aprobación. Señala que de Agosto de 2019, después que se negara a firmar el comunicado de apoyo al Director Regional al ser acusado públicamente por irregularidades, notó que el trato hacia ella y los otros colegas que no firmaron, había cambiado, recibiendo constantes presiones por parte del Director Regional y Subdirector para que variase sus criterios de calificación respecto de determinados proyectos que ingresaban a concursar a la institución.

En cuanto a los fundamentos del despido, indica que contiene falsedades en cuanto a su justificación. Alega la estrategia de Corfo para desvincular a trabajadores amparándose en la causal “objetiva” del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, mediante argumentos fácticos que no se corresponden con la realidad, tales como supuestos procesos de reestructuración, entre otros.

Señala, en cuanto a los términos de la carta de desvinculación, que respecto a las mejoras necesarias en la gestión regional, evidenciado en la urgente necesidad de separar las funciones de tesorería y contabilidad, calificado como “catastrófico” en el análisis de riesgo institucional, ya que se encuentran centralizadas en un mismo trabajador, lo que requiere impulsar la contratación de personal con un perfil de “contador regional”, con el objeto de materializar el principio de oposición de funciones, la adecuación de la gestión interna para prever errores en la ejecución de los recursos, mejorar los controles internos y minimizar los niveles de riesgo en las operaciones. Al respecto señala que las funciones de tesorería y contabilidad jamás existieron en Corfo Tarapacá, el que sería motivo suficiente para desvirtuar este argumento.

Agrega que desde el mes de Agosto de 2016, ingresó a Corfo Tarapacá el sr. Raúl Guzmán Veira, cumpliendo funciones de contabilidad y con quien trabajó en conjunto mientras prestó servicios como Coordinadora y en el mes de Marzo de 2018, el sr. Raúl Guzmán Veira fue contratado por Corfo Tarapacá para cumplir el cargo de Contador Regional al amparo de un contrato de trabajo. Así, en el ejercicio de sus funciones y como encargada de la gestión de riesgos, el año 2019 realizó, en conjunto con su ex colega Guzmán Veira, un análisis, a través de una matriz de riesgo, que tuvo como resultado lo crítico que resulta ser que el jefe de administración, esto es,



el sr. Raúl Veira Guzmán, fuera al mismo tiempo el contador, advirtiendo vulnerabilidades en función de riesgos dada la evidente incompatibilidad de una función con otra, materializando aquel análisis en una planilla Excel, la que fue enviada a nivel central para su consideración. Precisamente sería éste el análisis, de su autoría, la que reveló, entre otras vulnerabilidades, esta separación de funciones de contador regional y administración, pero en ningún caso de tesorería por cuanto esta función no ha existido. La “contratación de personal con un perfil de “contador regional”, también resultaría ser falso.

Argumenta que este análisis de gestión que realizó la institución, que permitió calificar de crítico que un mismo funcionario cumpliera varias funciones al mismo tiempo, también fue detectado en la Dirección Regional de Corfo de Arica y Parinacota, y, a pesar de ello, ningún funcionario de aquella región habría sido desvinculado.

Agrega que no es efectivo que la función de contabilidad sirva para mejorar y controlar gestiones y recursos, y que esa reestructuración no se vincula en modo alguno con su función de ejecutiva técnica, con 14 años de experiencia en la institución.

Indica que lo comunicado en la carta aviso de despido respecto a la emergencia sanitaria resulta indiscutible, dañando tanto el sector privado como público, por lo que ello no resultaría novedoso como excusa y lo propio ocurre respecto de la ley de presupuesto para el período 2021, misma que redujo los recursos monetarios para los servicios públicos, pero que ello no podría ser usado como razón de su despido, pues no estaría dentro de las hipótesis que alude el inciso 1° del artículo 161 de la Codificación Laboral, agregando que la ley 21.289, que regula el presupuesto del sector público correspondiente al año 2021, fue publicada en el Diario Oficial el día 16 de Diciembre de 2020, con vigencia diferida para el día 01 de Enero de 2021 (artículo 29 transitorio), mientras su despido se decidió el día 07 de Enero de 2021, es decir, en cuestión de días se determinó su destino laboral bajo el pretexto de “razones presupuestarias”.



Agrega que la carta no explica ni describe en qué consiste la “reorganización, reestructuración y racionalización” en Corfo Tarapacá, misma que necesariamente haya obligado a prescindir de sus servicios.

Respecto de las aparentes “mejoras” que habría que introducir en Corfo Tarapacá que obligarían contratar a un contador, señala que ese cargo ya existía en la región y era ocupado por el sr. Raúl Guzmán Veira, hasta el mes de Abril de 2019, quien luego asumió funciones de Coordinador de Administración y Gestión de Control, cuando la actora comenzó a desempeñarse como ejecutiva técnica, quedando radicada las funciones de contabilidad y administración en el sr. Raúl Guzmán Veira, de modo que la “actual urgente necesidad” de separar funciones provenían desde el año 2019, lo que obligaba a Corfo a contratar un contador regional en aquella fecha y ya no en el año 2021, con mayor razón si los fondos para pagar los servicios de un contador regional tanto en Tarapacá como en Arica y Parinacota ya se encontraban disponibles con anterioridad a Enero de 2021, por lo que no resulta justificable que su cargo terminara por razones económicas.

En relación a la “reducción presupuestaria” que señala Corfo Tarapacá, indica que de Enero a Julio de 2021 mantiene el mismo número de trabajadores contratados bajo la categoría de Código del Trabajo, esto es 11 funcionarios (desde Febrero a Mayo de 2021 sólo hubo 10 funcionarios como consecuencia de su despido, pero en Junio de 2021 contrataron a una contadora regional). En la categoría de honorarios, la dotación aumentó de 4 (Enero de 2021) a 8 (Julio de 2021). En la categoría de planta, existe el mismo número de 5 funcionarios mientras que en la categoría de contrata, no existen funcionarios.

Por ello explica que mientras en Enero de 2021, Corfo Tarapacá contaba con una dotación total de 20 funcionarios, ya en Julio de 2021 cuenta con un total de 24, dentro de quienes 6 son ejecutivos técnicos con Código del Trabajo (con la suscrita éramos 7); una ejecutiva técnico de planta (suplente) y 2 ejecutivos técnicos contratados a honorarios en el mes de Abril y Mayo de 2021, respectivamente (desde Enero a Marzo de 2021 no había ejecutivo técnico contratado bajo esta última categoría), es decir, se ha aumentado a 4 cupos adicionales, siendo 2 de ellos ejecutivos técnicos, en circunstancias que la carta de despido afirmaba que “las



labores y funciones atribuidas a los Ejecutivos Técnicos de la Dirección Regional de Tarapacá, sean desarrolladas por un menor número de funcionarias y funcionarios, de modo de no generar un cupo adicional de dotación de profesionales en la Dirección Regional”.

Por lo expuesto, sostiene que quedaría desvirtuado lo expuesto por la denunciada en su carta aviso de despido, esto es: a) Que aparentemente no había presupuesto y ello habría obligado a la reducción de personal; b) Que no existía posibilidad alguna de generar otro cupo para mantenerme en el cargo u otra función similar y c) Que su formación profesional no permitía que se mantuviera en el cargo.

Agrega que su despido, de fecha 07 de Enero de 2021, constituye un acto de discriminación en razón de carecer de parentesco con el Director Regional de Corfo Tarapacá CESAR REINALDO VILLANUEVA VEGA, ello por cuanto éste contrató, con fecha 01 de Septiembre de 2019, a la señora KAREN ELIZABETH LAGOS TALVAC, ingeniero en informática y control de gestión, como “ejecutiva técnica”, asignándosele grado 6, calidad jurídica de planta (suplencia), sin ningún concurso ni filtro previo, constando luego que se trataba de la cuñada de aquél, pues es madre de una hija en común que nació de una filiación no matrimonial con el hermano del Director Regional.

Alega también discriminación por su opinión política, ya que desde que don Cesar Villanueva Vega asumió en el cargo, en su calidad de Director Regional de Corfo Tarapacá, en Junio de 2018, la dotación de funcionarios Corfo en la región ha ido en aumento en confrontación con otros períodos y al alero de los anteriores directores regionales, llamando la atención que las contrataciones bajo la calidad de honorarios han estado dirigidas a personas de proclividad política y, en particular, del sector al que se denomina de “derecha”, siendo las razones más que obvias porque el Director Regional de Corfo Tarapacá es indiscutiblemente de aquella afinidad política, lo que resulta ser un hecho público y notorio.

En este contexto y abundando a lo ya expuesto, la suscrita fue funcionaria de carrera por un período de 14 años sin afiliación política específica, independiente, pero bajo ninguna perspectiva afín al sector catalogado como de “derecha”.



Una vez que fue desvinculada la anterior abogada regional de esta Dirección Regional (Mayo de 2019), a los meses (Agosto de 2019) fue contratado otro abogado de una evidente tendencia política de derecha, cargo que se mantiene hasta la fecha, lo que permite concluir que el reclutamiento de personal está condicionado con el color político de los postulantes y no por su perfil y formación profesional. Lo mismo señala respecto de la sra. Karen Lagos Talvac. Igualmente indica que en el mes de Diciembre de 2019, fue contratado en calidad de honorarios (transitorio), el sr. Alexis Inarejo Rivera, para prestar servicios de “asistente administrativo”, funcionario también de tendencia política similar a los anteriores y con la particularidad que se trata del sobrino de Ramón Galleguillos Castillo (actual Diputado de la República). Luego, en el mes de Julio de 2020, fue contratada bajo la calidad de honorarios (transitorio), la sra. Jocelyn Andrea Bugueño Díaz, para cumplir funciones de “asistente administrativo”, funcionaria de igual tendencia política, pues se trata de una ex funcionaria de la Municipalidad de Alto Hospicio, quien trabajó en conjunto con Cesar Villanueva Vega en el período que Ramón Galleguillos Castillo (actualmente diputado) fue alcalde de aquella comuna; el 01 de Septiembre de 2020, Cesar Villanueva Vega, contrató los servicios a honorarios de Jaime Francisco Martínez Zaror, asumiendo el cargo de ejecutivo financiero, también con tendencia política a fin del Director Regional; el 15 de Diciembre de 2020, Cesar Villanueva Vega, contrató los servicios a honorarios de Gustavo Adolfo Rivera Acuña, asumiendo el cargo de asistente administrativo y también con tendencia política a fin del Director; en Abril de 2021, aquel contrató los servicios a honorarios de Susana Isabel Alvarado Pérez, quien se ha desempeñado en la conocida Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá, asumiendo el cargo de ejecutiva técnica, también con tendencia política a fin del Director; por último, en el mes de Mayo de 2021, fue contratado Hugo Enrique Rodríguez Álvarez, bajo la calidad de honorarios para cumplir funciones de ejecutivo técnico, funcionario con clara tendencia política afín del Director Regional Corfo Tarapacá, pues se trataría de un trabajador de la Universidad Arturo Prat, vinculado con su actual rector y consejero regional, sr. Alberto Martínez Quezada, siendo reconocida la amistad existente entre el rector y consejero regional Alberto Martínez Quezada y el director regional Corfo Tarapacá, Cesar Villanueva Vega.



Así, indica, determinado el entorno político al interior de Corfo Tarapacá, señala que, admitiendo la denunciada que se debía reducir personal en la región de Tarapacá por razones “presupuestarias”, entonces la medida que correspondía aplicar era precisamente reducir personal transitorio y sin carrera funcionaria, en vez de desvincular a una funcionaria con años de trayectoria, como la actora.

Por ello, sostiene que siendo la demandante de opinión política opuesta a su ideología, era a quien había que desvincular sin importar si la mantención de los trabajadores transitorios referidos generaban mayor gasto mensual, privilegiando la opinión política cercana a Cesar Villanueva Vega, lo que altera la igualdad de trato en el empleo y la ocupación en los términos que reza el inciso 4° del artículo 2 del Código del Trabajo y que tuvo como resultado su desvinculación.

Alega, además, discriminación en razón de su formación profesional, pues la denunciada reconoce en la carta que como consecuencia de su formación profesional unido a la supuesta “ausencia de cupos”, fue lo que determinó, entre otros supuestos factores, su desvinculación, contraviniendo expresamente el inciso 4° del artículo 2 del Código del Trabajo al excluirme de mi fuente laboral basado en motivos de “formación profesional” y que tuvo por objeto anular la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.

También agrega discriminación por exigir estrictamente el cumplimiento de normas de probidad y normativa Corfo, según ya expuso anteriormente, pues al Director Regional Corfo Tarapacá, Cesar Villanueva Vega, le incomodaba sobremanera que reiteradamente le controvirtiera los aspectos técnicos de su trabajo y evaluación en los proyectos y gestiones en los que éste demostraba un interés, cuestión que determinó ser despedida al ser la única ejecutiva técnica que tuvo la entereza de imponer la probidad de su trabajo por sobre los intereses personales de la jefatura.

Por ultimo alega discriminación en razón de haber sido testigo en una causa laboral seguida en contra de Corfo, por cuanto siendo una de las pocas ejecutivas técnicas que estuvo dispuesta a declarar en el juicio laboral que su ex colega srta. Carolina Barrera Díaz siguió en contra de Corfo Tarapacá, lo que condujo a discriminarla y a su desvinculación.



Alega, además, violación de la indemnidad laboral, señala que ante este Juzgado de Letras del Trabajo, se llevó a cabo un juicio por vulneración de garantías constitucionales e indemnización de perjuicios iniciado por la funcionaria de Corfo Tarapacá, srta. Carolina Barrera Díaz, proceso judicial que comenzó con fecha 27 de Diciembre de 2019 y dirigido directamente en contra de la denunciada CORFO por actos vulneratorios de garantías constitucionales que su Director Regional de Tarapacá, Cesar Villanueva Vega, realizó en contra de aquella funcionaria en el contexto y como posterior consecuencia de irregularidades denunciadas por esta última en la evaluación del proyecto denominado “Estrategia Territorial para el Fortalecimiento de la Experiencia de Turismo Indígena. Caso Pueblos Aymara y Quechua en la Región de Tarapacá, código 18PCR-99571”, en aquel juicio laboral caratulado “BARRERA con CORFO”, al que se le asignó el RIT T- 253-2019, en audiencia preparatoria de fecha 07 de Febrero de 2020, la funcionaria denunciante, srta. Carolina Barrera Díaz, la propuso como testigo para declarar en aquella causa; posteriormente, con fecha 11 de Marzo de 2020, concurrió personalmente a la audiencia de juicio para prestar su declaración, siendo posteriormente relevada de aquella carga por disposición de la misma denunciante y en atención al límite legal de número de testigos que pueden deponer.

Indica que aquel proceso continuó y fue dictada sentencia definitiva con fecha 01 de Marzo de 2021, misma que acogió la denuncia por vulneración de garantías constitucionales y demanda por indemnización de perjuicios en contra de CORFO y condenó a esta última al cese inmediato de estas violaciones además de otras medidas reparativas como fruto del constante acoso laboral que su Director Regional, Cesar Villanueva Vega, realizó en contra de la funcionaria Carolina Barrera Díaz, sentencia cuya decisión se encuentra ejecutoriada.

Por ello alega que su desvinculación fue consecuencia de una represalia que Corfo Tarapacá, mediante su Director Regional Cesar Villanueva Vega, ejerció en su contra, por haber sido ofrecida como testigo en la causa indicada.

Alega también violación de la libertad de trabajo y su libre elección, pues la demandada redactó una carta de despido justificando motivaciones para despedirla, las que resultarían ser solo excusas, por lo que se trata de una medida arbitraria que



obedece al antojo de la jefatura de no verla involucrada más en ninguna sección de Corfo.

Señala, además, que su opinión o libertad de expresión, como ejecutiva técnica, en los procesos descritos anteriormente fue censurada porque en aquellas tres ocasiones tuvo la razón en las opiniones que emitió tanto en Comité como personalmente a Cesar Villanueva Vega, lo que condujo finalmente a su despido.

Indica como indicios de las vulneraciones de garantías denunciadas, su formación profesional con una trayectoria de más de 14 años en Corfo Tarapacá, siendo una de las funcionarias más antiguas, calificada continuamente en lista 1, sin procesos disciplinarios en su contra; no haber firmado la carta de apoyo al Director Regional en Agosto de 2019, cuando fue acusado públicamente y ante Contraloría General de La República por graves irregularidades en el proceso de evaluación y adjudicación de proyectos; haber figurado en la lista de testigos en la causa RIT T-253- 2019 de este tribunal, en donde Corfo fue condenado por violentar las garantías constitucionales de la funcionaria Carolina Barrera Díaz y en donde se comprobó que efectivamente ésta fue presionada para adulterar fichas técnicas; también por representar constantemente las irregularidades y presiones que no acepté para adulterar evaluaciones y proyectos en los que tenía interés personal el director del servicio; no tener parentesco con el Director Regional ni afinidad política con su sector; las excusas contenidas en la carta de despido, construidas con el objeto de desvincularla.

Relata que, con fecha 22 de Febrero del año 2021, firmó ante Notario de finiquito con reserva expresa de las acciones que ejerce y en aquel instrumento figura pago por un monto total de \$39.389.423.-, de los que sólo me pagaron la suma de \$30.128.489.-, pues se descontó la suma de \$9.260.934.- correspondiente al aporte del seguro de cesantía realizado por la demandada, alegando la improcedencia del descuento por aporte del empleador a seguro cesantía, ndada señalando como fundamento que aquello resulta improcedente atendido que no concurre en la especie el supuesto que proporciona las bases jurídicas para realizarlo, esto es que la causal de despido sea procedente, pues, no podría estimarse “válida” para unos efectos (el descuento) y “no válida” para otros (el despido).



Por ello, pide que la demandada sea condenada al pago y/ reintegro íntegro de la indemnización por años de servicios, sin descontar el dinero aportado por la demandada a su cuenta individual del seguro de cesantía, todo ello en la suma descontada de \$9.260.934.-

Alega que en la cuantía de la indemnización adicional del artículo 489 inciso 3° del código del trabajo no debe aplicarse el límite que regula el inciso 3° del artículo 172 del Código del Trabajo al tratarse de una indemnización especial con regulación propia y porque regiría sobre este particular el principio de la norma más favorable para el trabajador, máxime cuando el tope de 90 uf sólo está establecido para las indemnizaciones de los artículos 163, 163 bis, 168, 169, 170 y 171, conforme expresamente lo dispone el inciso final del artículo 172 del mismo cuerpo legal, de manera que aquella limitación de derecho estricto no es aplicable a esta indemnización de naturaleza adicional y sancionatoria que se encuentra regulada en el inciso 3° del artículo 489 de la misma codificación.

Alega que la última remuneración íntegra corresponde a aquélla del mes de Diciembre de 2020, la que asciende a la suma de \$4.860.094.-, según da cuenta la liquidación de sueldo correspondiente a aquella mensualidad, sin perjuicio de exponer que, conforme la regla establecida en el artículo 172 incisos 1° y 2° del Código Laboral, tratándose de una remuneración cuya naturaleza es variable, entonces el promedio asciende a la suma de \$3.440.370.-

De otra parte, alega la nulidad del despido, pues, las cotizaciones previsionales administradas por las Instituciones de Seguridad Social como AFP Capital, Isapre Banmédica y Achs, respectivamente y que corresponden al mes de Junio de 2010, no se encuentran pagadas íntegramente sino sólo se encuentra pagado lo correspondiente a AFC y el seguro de invalidez y sobrevivencia AFP (SIS).

declarar la existencia o constatación de la o las conductas discriminatorias y/o lesiones o vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido en contra de la suscrita, declarando que el despido del cual fue víctima fue discriminatorio y que éste, además, fue grave y que tal despido vulnera lo establecido en los artículos 2 inciso 4° y 485 inciso 3° del Código del Trabajo, y en consecuencia deberá reintegrarla a sus funciones, ordenando el pago de sus remuneraciones desde el día 19



de Enero de 2021 hasta la fecha del reintegro efectivo a razón de \$2.730.508.- mensuales más los respectivos incentivos y asignaciones trimensuales o declarar que el despido lo fue con lesión o vulneración de derechos fundamentales denunciados, condenando a la denunciada a las indemnizaciones del artículo 489 inciso 3° del Código del Trabajo, recargo por la improcedencia de la causal invocada contenido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, esto es el 30% sobre la indemnización por años de servicio,

En subsidio de la acción de tutela laboral entablada en lo principal, interpone demanda de reclamación por despido improcedente, reproduciendo lo señalado en la acción principal y agregando que del análisis de la carta de despido, es posible sostener que la demandada ha trasladado el riesgo directamente a sus trabajadores, siendo que la causal de necesidades de la empresa, está contemplada en nuestra legislación como una causal de término de carácter objetiva, independiente de la voluntad de las partes y dice relación con circunstancias que rodean la actividad económica de que se trata, desde el momento en que los casos contemplados en la ley apuntan a circunstancias económicas o tecnológicas y se exige la concurrencia de dos requisitos: que las circunstancias no emanen de la sola voluntad o responsabilidad de la empresa y que los hechos que le sirven de fundamento sean graves, objetivos y permanentes, excluyéndose los problemas e inconvenientes transitorios o subsanables, los que no concurren en este caso, por lo que demanda el pago del recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicios que corresponde a la suma de \$8.633.889.-, de conformidad con lo establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo.

SEGUNDO: La demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo. Al respecto, VÍCTOR GONZALO CAMPOS MUÑOZ, abogado, en representación de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, opone, primeramente, excepción de compensación, de conformidad a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley N° 19.728 sobre Seguro de Desempleo, pues ha aportado al seguro de cesantía de la actora, la suma de \$9.260.934.- (nueve millones doscientos sesenta mil novecientos treinta y cuatro pesos), correspondientes a las cotizaciones sobre las remuneraciones devengadas durante el periodo que prestó servicios para CORFO y conforme lo prescrito en el artículo 13 de la Ley N° 19.728 sobre Seguro de Desempleo, el Monto



Aportado por el Empleador, corresponde deducirlo de la indemnización por años de servicios, prevista en el inciso segundo, del artículo 163 del Código del Trabajo, cuando el contrato termina por la causal necesidades de la empresa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161 del mismo cuerpo legal, situación que ocurre en este caso.

En cuanto al fondo, contesta derechamente la denuncia por tutela laboral, y cobro de indemnización, demanda de nulidad del despido y subsidiaria de despido injustificado, y cobro de prestaciones interpuesta negando los hechos alegados por la actora en el libelo que contiene la demanda, exponiendo que no resulta efectivo:

a) Que la causa de la desvinculación de la actora sea una represalia como consecuencia de la presentación en calidad de testigo de la actora, en el juicio laboral de doña Carolina Barrera Díaz, en la que finalmente no declaró, ya que el despido de la actora sólo obedece a las razones que se describen en la carta de despido, y exclusivamente por la causal legal, necesidades de la empresa. b) Que, en sus labores en la Corporación, haya recibido de forma constante presiones por parte del Director Regional y Subdirector, para que variase sus criterios de calificación respecto de determinados proyectos que ingresaban a concurso a la institución. c) Que, el despido de la demandante sea injustificado, ya que el mismo se ajusta rigurosamente a la causal legal invocada, necesidades de la empresa. d) Que, haya sido discriminada con ocasión del despido, por carecer de parentesco con el Director Regional de CORFO Tarapacá; por su opinión política; en razón de su formación profesional; por haber exigido la observancia de normas de probidad y normativa de CORFO; en razón de haber sido designado como testigo de una causa laboral seguida en contra CORFO. e) Que, el despido de la actora sea nulo por no pago de cotizaciones previsionales administradas por las instituciones de Seguridad Social como AFP Capital, Isapre Banmédica y Achs, correspondientes al mes de junio de 2010, pues, dichas prestaciones sí se pagaron en su oportunidad. f) Que el monto que indica como remuneración, sea el que efectivamente haya percibido mensualmente.

Aclara como primera cuestión, que CORFO es una persona Jurídica de Derecho Público, encargada de ejecutar las políticas gubernamentales en el ámbito del emprendimiento y la innovación, a través de herramientas de instrumentos compatibles con los lineamientos centrales de una economía social de mercado y, que



se relaciona con el Supremo Gobierno, a través del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, siendo su Vicepresidente Ejecutivo su representante legal. La Corporación de conformidad a lo prescrito en el artículo 22 de la Ley N° 6.640 que crea la CORFO, así como el artículo 6° de su Reglamento General, es administrada y dirigida por un Consejo, cuya composición y atribuciones las determina la normativa citada. A su turno, CORFO en virtud de las facultades que le confiere el inciso tercero del artículo 7°, del Decreto con Fuerza de Ley N° 211, del Ministerio de Hacienda, tiene la facultad de crear Comités para sus fines específicos, lo cuales son organismos técnicos integrantes y dependientes de la Corporación. En todas las regiones del país, la Corporación de Fomento de la Producción cuenta con unidades denominadas Direcciones Regionales, dirigidas por un Director Regional, cuya finalidad general es integrar la acción de las áreas de negocio de CORFO en el territorio, considerando las particularidades de cada región y la estrategia institucional a nivel regional. Dentro de sus funciones específicas, se encuentran delegadas, entre otras, facultades relacionadas con instrumentos de CORFO y del Comité InnovaChile -unidad dependiente e integrante de la Corporación de Fomento de la Producción.

Explica que es en la Dirección Regional de Tarapacá de CORFO, en donde prestó servicios la denunciante doña María Alejandra Bustamante Tapia, quien se encontró vinculada con CORFO (inicialmente con el Comité Innova Chile), desde el Contrato de Trabajo que suscribió con fecha 29 de diciembre de 2006, vinculación que concluyó mediante carta de despido de fecha 7 de enero de 2021, por la causal necesidades de la empresa, fecha en la que desempeñaba labores de ejecutiva técnica.

Respecto de la acción de denuncia por tutela laboral, solicita su rechazo por la ausencia de discriminación con ocasión del despido, señalando que la Corporación de Fomento de la Producción no recibió ninguna denuncia formal respecto de los hechos que se han descrito en la presente demanda, en el tiempo en que supuestamente ocurrieron los supuestos hostigamientos, no obstante que existen protocolos claros y conocidos por los trabajadores sobre la materia en la institución, regulados en el Reglamento Interno y, específicamente, en la Resolución (E) N° 19, de fecha 18 de enero de 2019, de CORFO, que aprueba el Procedimiento de Prevención, Denuncia e Investigación sobre Maltrato, Acoso Laboral y Sexual para CORFO y sus Comités, que es de conocimiento general de los funcionarios de la Corporación, entre otros



medios, a través de la misma intranet de CORFO, así como de periódicas Charlas sobre Prevención del Maltrato, Acoso Sexual y Laboral, que cada cierto tiempo imparte la institución.

Indica que, respecto al caso expuesto de solicitud de bonificación de inversiones por 30 millones de pesos solicitada por un empresario, en el marco del OFL N° 15, los pequeños y medianos inversionistas, productores de bienes o servicios, que realicen inversiones en activos productivos (compren bienes de capital) en determinadas regiones de Chile, entre las que se cuenta la Región de Tarapacá, pueden optar a recibir del Fisco el pago de una bonificación equivalente al 20% del monto invertido. Para optar a la bonificación, los interesados deben concursar a través de perfiles de proyectos que describan las mejoras generadas por estas nuevas inversiones en su negocio y en su comunidad. Con ocasión de la ejecución de dicho beneficio, la actora efectúa determinadas aseveraciones que refutan. Expresan que la situación que expone fue detectada por la actora a cargo del proceso DFL-15, quien en el cumplimiento de sus funciones netamente técnicas observa la inconsistencia respecto a determinados bienes incorporados por primera vez al sistema productivo nacional por un beneficiario que podía beneficiarse con la devolución de la inversión efectuada por ellos, siendo este punto NO normado en el DFL-15 de abril de 1981, y solo mencionado en las bases del concurso, lo cual se habló y consultó oportunamente con el Director Regional de Tarapacá, quien precisamente instruyó convocar al Comité Resolutivo, atendido que en esta materia CORFO sólo tiene la calidad de órgano asesor. Aclara que quien resuelve en última instancia, como lo indica el Art. 12 del mismo cuerpo legal que norma este subsidio, es el "Comité Resolutivo", para lo cual, a razón de dudas respecto a lo planteado por la actora, se solicitó una declaración jurada, según Ord. N° 314/2020, al potencial beneficiario, y adicionalmente una aclaración a la Tesorería General de la República, para un mejor resolver. Es así como que habiendo sido citado el Comité Resolutivo, la actora expuso el punto sobre los bienes que se pretendían incorporar por el beneficiario, respecto a si los mismos podían acogerse al beneficio del subsidio establecido en el DFL-15, siendo en definitiva rechazado dicho subsidio por el Comité Resolutivo DFL-15/81, celebrado el 8 de julio de 2020, lo que resolvió ya que los bienes a bonificar no tienen el carácter de "nuevos", requisito exigido en las Bases,



agregándose como fundamentación de dicha petición, precisamente, la carta emitida por la empresa LP Producciones SpA., el informe de la Tesorería Regional de Tarapacá, y la Contraloría Regional de la República (en dictamen N° 030205N81 / 1981).

En consecuencia, y de acuerdo a lo anterior, no se aprecia cuál pueda ser la disconformidad, o "enfrentamiento grave" expuesto por la actora, pues lo sucedido se encuentra dentro del procedimiento propio y reglado a que debe sujetarse la Dirección Regional.

Respecto a las afirmaciones efectuadas por la demandante, a propósito del instrumento Semilla Inicia y concurso FNDR de prototipos de Innovación de octubre de 2020, indica que se ejerció las facultades que el Director Regional tiene en estas materias: la revisión técnica de los proyectos efectuada por un ejecutivo, ya que no es vinculante a la decisión fundada de recomendar aprobar o rechazar un proyecto en cualquier Comité por parte del Director Regional y es éste quien debe recopilar los antecedentes para su aprobación o rechazo, como lo ha dicho la Contraloría General de la República.

Explica que el Comité InnovaChile de CORFO, es el que mediante Resolución (E) N° 154, de 2015, creó y aprobó las Bases y anexos del instrumento de financiamiento denominado "Bienes Públicos para la Competitividad Regional", con modalidad de postulación ventanilla abierta y por el mencionado instrumento de financiamiento se convoca para la postulación de proyectos destinados a desarrollar bienes públicos y la evaluación, el seguimiento y control respecto de los Proyectos operaría la delegación completa de facultades contempladas en la Resolución (E) N° 1.780, de 2011, de CORFO, en la región, por ello los Directores Regionales tienen, entre otras, las siguientes facultades: 1.Recepcionar Proyectos; 2.- Someter los proyectos a evaluación de los profesionales con que cuenta la Dirección Regional respectiva o a evaluación externa; 3.- Revisar los informes de evaluación, los resúmenes ejecutivos de evaluación externa, otorgando su conformidad y verificando la calidad de éstos; 4.- Proponer al respectivo subcomité, previa evaluación técnica, la aprobación o rechazo de las solicitudes de cofinanciamiento presentadas por los interesados para optar a los distintos beneficios.



Por Resoluciones que indica se aprobaron las Bases Administrativas Generales para todos los Instrumentos o Líneas de Financiamiento del Comité y se estableció que los proyectos postulados serán sometidos a un Análisis de Antecedentes Legales, un Análisis de Pertinencia, para continuar con un Proceso de Evaluación técnica, para posteriormente ser presentado al órgano competente, el que decide, a propuesta de entre otros, del mencionado Comité o del Director Regional, su aprobación o rechazo.

Por ello sostienen que atendido la delegación de facultades que tiene el Director Regional es él quien, en definitiva, debe recopilar los antecedentes para aprobación o rechazo de los proyectos, por lo cual la revisión técnica efectuada por un ejecutivo no es vinculante a la decisión fundada de recomendar aprobar o rechazar un proyecto en cualquier Comité por parte del Director Regional respectivo.

Por ello sostienen que todas las imputaciones de intromisión que se indican en el libelo, respecto del instrumento denominado Semilla Inicia, convocado por Concurso FIC 2019, así como las relativas al proceso de presentación de los proyectos del concurso FNDR de prototipos de innovación social de octubre de 2020, junto con no ser efectivos, sólo corresponde a actuaciones que dentro de sus competencias se han ejercido por la Dirección Regional de Tarapacá.

De otro lado, rechaza el hecho de que la actora ha sido discriminada por no ser pariente del Director Regional, sosteniendo que dicha situación fue analizada por la Contraloría General de la Republica con informe favorable según Ord. N° 10.295 del ente fiscalizador a raíz de denuncia efectuada en iguales términos.

Agrega el Rechazo a la afirmación de la actora de que ha sido discriminada por su opinión política, enumerando a trabajadores que habrían sido contratados con marcada línea política: Alexis Inargo, Jocelyn Bugueño, Jaime Martínez, etc., sosteniendo que todas las personas aludidas no cuentan con afiliación política, según Certificados de Afiliación Política emitidos por el SERVEL.

En cuanto a su postulación a ejecutivo de innovación que realizó a CORFO Región Metropolitana, señala que dicha postulación fue rechazada, luego de la etapa de evaluación psicolaboral, debido a que los resultados de su informe de evaluación no se ajustaban completamente a las competencias requeridas para el cargo.



Rechaza, también, la afirmación de que el Director Regional de CORFO, efectuó presiones a la funcionaria, doña Ana María Céspedes para influir en la elección de Anecor Regional de Mauricio Vega.

Sostiene, también, la Falta de Indicios de Vulneración de derechos por parte de la demandante, pues, la denuncia no cumple con los requisitos básicos del artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, pues, todos los actos que alega corresponden a decisiones técnicas del servicio demandado o a erradas valoraciones de la actora.

Sobre la demanda subsidiaria de despido injustificado, solicita igualmente su rechazo indicando que la carta de despido de fecha 7 de enero de 2021, fue laxa en los hechos que fundamentaron la causa legal de desvinculación "necesidades de la empresa", y como señaló en la carta las Direcciones Regionales, y en consecuencia la Dirección Regional de Tarapacá, en la que se desempeñó la actora, tienen por función conducir, coordinar y planificar -a nivel regional- la implementación de la estrategia institucional y del Gobierno en el ámbito de competencias de la Corporación, impulsando y administrando en ese territorio, los instrumentos de apoyo de CORFO y sus Comités que le han sido delegadas, pudiendo generar propuestas para la ejecución regional. En el desempeño de sus funciones, deben efectuar las mejoras necesarias en la gestión regional, conforme a las facultades de que están dotadas o que le han ido delegadas. Lo anterior, de conformidad a lo que se expresa en la Resolución Exenta CORFO N° 547, de 2020, que contiene y aprueba la "Organización y Descripción General de Funciones y Coordinación de la Corporación de Fomento de la Producción".

Es en este marco, explican, se evidenció la urgente necesidad de separar las funciones de tesorería y contabilidad, las que fueron calificadas como "catastróficas" en el análisis de riesgo institucional, ya que las mismas se encontraban centralizadas en un mismo trabajador, lo que requirió impulsar la contratación de personal con un perfil de "contador regional", esto para materializar el principio de oposición de funciones, la adecuación de la gestión interna para prever errores en la ejecución de los recursos, mejorar los controles internos y minimizar los niveles de riesgo en las condiciones normales de operación en la Dirección Regional de Tarapacá.



Además, con ocasión del impacto que la emergencia sanitaria tanto a nivel nacional, como mundial, está produciendo, en distintos aspectos de la sociedad, particularmente en el ámbito económico está generando fuertes ajustes que también han afectado insoslayablemente a los Servicios Públicos, debiendo aplicarse en ellos una fuerte racionalización de recursos para el año entrante, racionalización de las que no resultó ajena CORFO, ni por cierto la Dirección Regional de Tarapacá. Es así como la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, establece, en términos generales, ajustes importantes que afectan a diversos Servicios, entre los cuales se cuenta CORFO, y sus Comités, el que presenta un presupuesto menor al del año previo, con una rebaja considerable que afecta una serie de programas, con consecuencias en el personal que se desempeña en la Corporación, y particularmente en sus Comités; debiendo poner término a algunos de ellos y, en particular, reducir el número de funcionarios de la Corporación, respecto del cual se ha resuelto la desvinculación de trabajadoras y trabajadores, entre los cuales se encontraba la actora.

Así en el mes de diciembre de 2020, término de Comités de CORFO, y del traspaso de uno de ellos a otro Servicio, señalan: a. ☐ Término en el mes de diciembre de 2020, de los Comités de CORFO Comité Solar, e Industrias Inteligentes. b. ☐ Reducción del número de integrantes del Comité Indígena de CORFO de 9 a 4 funcionarios. c. ☐ Traspaso del Comité para la Innovación Pública, Laboratorio de Gobierno (GOBLAB) a la Secretaría General de la Presidencia.

Atendida la reducción presupuestaria, la Corporación se habría visto obligada a reorganizar, reestructurar y racionalizar la estructura de programas e instrumentos institucionales; así como también asumir y reestructurar programas e instrumentos que siendo desarrollados inicialmente por Comités deben ser impulsados a través de la Corporación, lo que requiere inevitablemente efectuar el ejercicio de priorizar las labores de trabajadores y trabajadoras de la Corporación y sus Comités, para enfocarse en la ejecución de programas e instrumentos que ya se encuentran diseñados; y particularmente en el caso de la Dirección Regional de Tarapacá, generar la administración de fondos extrapresupuestarios, vía proyectos ya formalizados, junto con la proyección estimada para el año 2021.



Por ello sostiene que la reorganización, reestructuración y racionalización antes expuesta, así como el deber de efectuar mejoras necesarias en la gestión regional, antes descrita, han determinado atendido las nuevas prioridades impulsadas por la disminución presupuestaria, contar con un profesional experto en área de contabilidad; y que las labores y funciones atribuidas a los Ejecutivos Técnicos de la Dirección Regional de Tarapacá, sean desarrolladas por un menor número de funcionarios y funcionarios, de modo de no generar un cupo adicional de dotación de profesionales en la Dirección Regional; por lo que las funciones que desempeñó la actora en su calidad de Ejecutiva Técnica, fueron redistribuidas y asimiladas entre el resto los ejecutivos de la Dirección Regional.

Sobre la necesidad de separar las funciones de Tesorería y Contabilidad, sostiene que la separación corresponde al área de Administración/Control de gestión, con el área de Contabilidad/Tesorería que fue el cambio impulsado en la Dirección Regional de CORFO Tarapacá. Agrega que no es efectivo lo sostenido en la demanda, pues las Labores asociadas al área de Tesorería, son regulares en la Dirección Regional de Tarapacá, e incluyen tareas como: a. ☐ Recepción, revisión, validación, ingreso de documentos Valorados (Boletas de Garantías/pólizas/Cert. De Fianzas); b. ☐ Gestión de Pagos de Proyectos (con Fondos Extrapresupuestarios y Fondos CORFO/INNOVA); c. ☐ Gestión de Pagos de servicios básicos (Gasto Común/Correspondencia/ Mantenciones/Etc.) y d. ☐ Administración y Custodia de Valores, Cobro de Garantías.

En cuanto a la necesidad de contar con un profesional experto en áreas de contabilidad, para el cargo Contador(a) Regional, se requería un profesional del área Contable, con conocimientos en Contabilidad Gubernamental, SAP FI-CO y dentro de la Dirección Regional no se encontraba dicha expertis excepto en quien asumía dichas Labores (Jefe de Administración), por lo cual fue necesario el llamado a concurso.

Efectividad de que la Dirección Regional de Tarapacá hoy cuenta con más funcionarios que los que existían cuando la ex trabajadora aún prestaba servicios en CORFO, pero todos ellos contratados a honorarios para ejecutar los proyectos adjudicados con fondos extrapresupuestarios pagados por el Gobierno Regional de



Tarapacá y todos los nuevos proyectos en ejecución, tiene profesionales de apoyo al proyecto que particularmente se ejecute, sin responsabilidad administrativa y para seguimiento exclusivo de su proyecto.

Expresa que con fecha 16 de abril de 2021, se publica el concurso para Contador(a) Regional de la Región de Tarapacá en EmpleosPublicos.cl, aclarando que por la situación de pandemia y la restricción de gasto impuesta por parte de DIPRES, que es quien debe autorizar la contratación, es que se presentaron los retrasos en la contratación, para, finalmente, contratar a contar del 1 de junio de 2021, a la Contadora Auditor/Ingeniero Comercial doña María Cristina Morales Barraza.

Señala que existió un análisis de riesgo institucional, que dio cuenta de lo imperioso de separar las funciones de tesorería y contabilidad de la Dirección Regional de Tarapacá, ello de acuerdo a lo indicado por la Gerencia Corporativa y la Matriz de riesgo aprobada a Julio 2020, dentro de los Riesgos cuyo impacto tienen la categoría de "Catastrófico", existiría un total de 18 controles, de los cuales 7 (39) son realizados por el Jefe de Administración, por lo tanto, al tener concentración de funciones (asumir además la totalidad de las funciones de Contador Regional) y no existir control por oposición en los distintos procesos de Contabilidad/Presupuesto/Custodia de Valores/Tesorería, aumenta considerablemente el nivel de riesgo asociado a la confiabilidad de la información financiera contable, al concentrarse la responsabilidad en un sólo funcionario, pudiendo que los controles no operen eficientemente, cuestión que habría sido observada en distintas Auditorías por parte la CGR a distintos servicios. Por lo anterior, la contratación del cargo de Contador Regional, tiene como principales objetivos los siguientes: a. ☐ Resguardar los recursos de CORFO evitando pérdidas, detectar las desviaciones que se presenten y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la corporación. b. ☐ Ejercer un adecuado control interno administrativo y contable. c. ☐ Garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la eficiencia operacional d. ☐ Evitar la concentración de funciones. e. ☐ Evitar que todos los aspectos de una transacción u operación no se concentren en manos de una sola persona f. ☐ Detectar las desviaciones que se presenten y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la corporación. g. ☐ Cualquier instancia que presente riesgos y que impidan o dificulten el cumplimiento normativo.



De otro lado solicita el rechazo de la acción de nulidad del despido, pues las cotizaciones previsionales administradas por las Instituciones de Seguridad Social como AFP Capital, Isapre Banmédica y Achs, respectivamente, y que corresponden al mes de junio de 2010, se encuentran pagadas, indicando al efecto que en el año 2010, la ex funcionaria, estando vigente su contrato, se encontraba con licencia por accidente laboral desde el 9 de abril de 2020 hasta el 4 de junio de 2010, total de 57 días, no obstante ello, y conforme certificado de previred y certificado emitido por la Asociación Chilena de Seguridad de fecha 16 de junio de 2010, las prestaciones reclamadas, fueron debidamente depositadas en las respectivas entidades: a saber, AFP Capital -aportes previsionales y seguro de desempleo-, y en Isapre Banmédica, los respectivos aportes al fondo de salud, fueron enterados precisamente por la Asociación Chilena de Seguridad, y las cotizaciones que correspondían a Corfo durante el período de licencia, fueron enteradas por ella .

TERCERO: Que la cuestión controvertida esencial a determinar en este litigio, se refiere a dilucidar la existencia de vulneración de derechos fundamentales de la actora ocurrida con ocasión de su despido.

CUARTO: Al respecto, la trabajadora demandante propuso en su demanda que la vulneración de derechos fundamentales, de que habría sido víctima, se produjo con ocasión de su despido, atropellando su derecho a la libertad de opinión y de trabajo y su libre elección, indemnidad laboral y garantía de no discriminación, pues, a partir de la llegada del nuevo Director Regional de la demandada Corfo Tarapacá, sr. César Villanueva Vega, en el año 2018, se habría generado un ambiente hostil en la Dirección Regional, lugar donde se desempeñaba la actora, indicando que, a su respecto, desde Agosto de 2019, después que se negara a firmar un comunicado de apoyo al Director Regional, luego de ser acusado aquél públicamente por irregularidades, notó que el trato hacia ella y los otros colegas que no firmaron, había cambiado, recibiendo constantes presiones por parte del Director Regional y Subdirector para que variase sus criterios de calificación respecto de determinados proyectos que ingresaban a concursar a la institución, relatando al efecto que en sus funciones de ejecutiva técnica, en la Dirección Regional, habrían sucedido hechos irregulares en las presentaciones de algunos proyectos, específicamente en cambios de decisiones sobre aprobar o rechazar los mismos, al margen de la evaluación que la



ejecutiva técnica había realizado; Así, relata que a raíz de la solicitud del Director Regional para que llevara a rechazo un proyecto con buena evaluación, por parte de la ejecutiva técnica srta. Carolina Barrera Díaz, se generó una serie de acontecimientos que resultaron en el despido de la referida y de la abogada de la Dirección Regional, en mayo de 2019, lo que motivó una denuncia ante la Contraloría y que en Agosto de ese año, la prensa local dio cuenta de una serie de hechos irregulares y a raíz de lo anterior, el 16 de agosto de 2019, 13 de los 16 funcionarios de la Corfo Tarapacá emitieron una declaración pública, supuestamente apoyando la gestión del Director Regional, declaración que la actora no firmó pese a que habría sido interpelada formalmente por parte del Subdirector regional, Sr. René Fredes Ramírez; Posteriormente, el día 21 de agosto del mismo año, señala que recibieron un correo de parte del Director Regional, César Villanueva Vega, agradeciendo públicamente a los funcionarios de Tarapacá por la declaración emitida, correo que venía en respuesta, a uno enviado por el subdirector René Fredes Ramírez, que indicaba “Adjunto a Ud. Declaración pública de apoyo a su gestión suscrita de manera espontánea y voluntaria por 13 de los 16 funcionarios de nuestra Dirección Regional”; continúa con que el 16 de Septiembre de 2019, recibió un correo del Director Regional por una carta ingresada por un consultor del DFL 15 (programa ejecutado por Corfo), indicando su preocupación por una supuesta carpeta extraviada y molestia del consultor Sr. Jorge Claure, por una respuesta, en que habría indicado que se vería todo después de las fiestas patrias, porque no habría personal en la Dirección Regional, señalando que en la misma fecha ella le dio respuesta vía correo electrónico al referido, pero, luego de transcurrido 15 minutos, el Director Regional, envía correo a todos los funcionarios, indicando: “Agradeceré evitar situaciones informales para evitar este tipo de acontecimientos, y de sobre manera tendré en cuenta que el suscrito sólo se le informe formalmente de antecedentes o situaciones relevantes, que sean de mi competencia y que deba por normativa orgánica estar en conocimiento. Situaciones de carácter personales o derechamente fuera de normas, no se puede hacer cargo ya que no está en antecedentes”; después, el 23 de octubre de 2019, recibió un mail del Director Regional con copia a toda la Dirección Regional, indicándole: “Alejandra, todas las gestiones de los ejecutivos deben ser vista directamente con el Subdirector, por tanto ruego dar estricto cumplimiento a esta indicación, no revisaré nada de forma directa sin previo VB del Subdirector. Del



mismo modo agradeceré que cuando sea René quien solicite alguna gestión, le respondas a él como jefatura directa de cada ejecutivo. Copio a la DR para estar en conocimiento del cómo proceder”; continúa con suceso que habría ocurrido el día Jueves 19 de Diciembre de 2019, oportunidad en debía visitar una empresa en la comuna de Alto Hospicio y el Director Regional tenía que asistir al Consejo Regional, y como existían dos vehículos institucionales, pero un solo chofer, fue a conversar con el Director para solucionar el problema y pedirle que el chofer le llevase a ella a la visita, pues la empresa se encontraba en un lugar apartado y por seguridad, a lo que el Director le responde que no se preocupe que llamaría a Andrés Leyton, periodista de la Dirección Regional, para que lo llevara en el otro vehículo, sin embargo, a los minutos recibe un mail del Director Regional, dirigido a Raúl Guzmán, Jefe de administración y Control de Gestión y al Subdirector con el siguiente tenor: “René, Raúl: Consultar si administrativamente existe algún requisito de que los ejecutivos deben manejar el vehículo para sus visitas, me caracterizo por no utilizar a Juan (chofer) pero es complejo tener que adaptarme en fechas tan importantes (estoy a la espera de la llamada del CORE para presentar la tercera modificación de FIC) y estacionar es un caos. Me iré en Uber, pero no me sirve que los ejecutivos no manejen. Favor puedes averiguar”; a continuación, indica que, en marzo de 2020, a raíz de demanda laboral interpuesta por la ejecutiva técnica, doña Carolina Barrera Díaz, fue citada a través de carta certificada a declarar como testigo en la causa RIT T-253-2019, caratulada “BARRERA con CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN” a la audiencia de juicio programada para el día 11 de marzo de 2020, a las 10:30 horas, en el Juzgado de Letras del trabajo de Iquique, a la cual acudió como testigo, aunque no rindió efectivamente declaración; luego, expresa que a fin de mayo de 2020, en sus funciones como encargada de la ejecución del DFL 15, se le presentó una situación con un empresario que solicitaba una bonificación de sus inversiones, el cual de acuerdo con las bases debía ser rechazada por no cumplir con ciertos requisitos en relación con los bienes ingresados al ciclo productivo, en relación a esto señala que recibió un llamado del Director Regional consultándole las razones de este rechazo, explicándole su análisis, a lo cual le dice telefónicamente que “prácticamente me estoy metiendo en temas que no me competen y que sólo se le debe pedir al empresario una Declaración jurada indicando que, si son nuevos”, agrega que el Director le pidió convocar un Comité



Resolutivo para ver este asunto, el cual solicitó pedir información al empresario, el que respondió y expuso que los bienes no eran nuevos, pero, a pesar de ello, el Director Regional pidió que la Tesorería Regional hiciera su análisis y, finalmente, el 08 de Julio de 2020, se realizó nuevamente el comité resolutivo del DFL 15 para rechazar la devolución solicitada por el mentado empresario, señalando que por lo anterior se tardaron cerca de un mes y medio en resolver este conflicto, con todo el trabajo extra administrativo y la demora para pagar otros proyectos; relata a continuación que, en el mes de Junio de 2020, estaba trabajando en los proyectos del instrumento Semilla inicia convocados por Concurso FIC 2019, instrumento que busca apoyar a emprendedores que cuenten con negocios de alto potencial de crecimiento y en este proceso los ejecutivos realizan una primera evaluación de pertinencia, posteriormente la evaluación técnica que se rige por una pauta de criterios indicados por bases, ello previo a la presentación de los proyectos al Comité de Asignación Regional Norte (CAR Norte), representado por los 5 directores regionales y tres consejeros de Corfo Central, el comité se realizaría el 05 de Junio de 2020, pero el día 04 de junio recibió un mensaje a través de WhatsApp por parte del Director Regional de Corfo Tarapacá, Cesar Villanueva Vega, indicando: “*que había revisado el ranking del proyecto, y que había bajado la nota, ¿qué había pasado?*”, luego de ello, el Director Regional le preguntó por las razones de la nota y el porqué de su criterio para calificarlo de esa forma, en circunstancias de que él tenía otra opinión, favorable al proyecto, para luego recibir una llamada del empresario cuyo proyecto estaba calificando, a quien le explicó las razones técnicas del rechazo, manteniendo su evaluación; después, sostiene que comenzó el proceso de la presentación de los proyectos del concurso FNDR de prototipos de innovación social, durante el mes de Octubre de 2020, instrumento que cofinancia la creación de innovaciones en productos, procesos, servicios y/o nuevas prácticas orientadas a generar el impacto social en la región de Tarapacá, y el proyecto que evaluó y quedó por sus calificaciones en el N° 1 del ranking, con nota 4,3 y buenos comentarios, fue recomendado a rechazo por el Director Regional Corfo Tarapacá, Cesar Villanueva Vega, señalando que el postulante había recibido financiamiento en el mismo concurso el año 2018, y que su acuerdo con los Consejeros Regionales era no volver a financiar las mismas empresas, por lo que, sostiene, fuera de todo protocolo, recomienda rechazar una postulación que tiene mérito técnico y que cumplía con



todos los requisitos de financiamiento, por razones que califica de arbitrarias e irregulares, pero, finalmente, los consejeros dieron su recomendación positiva para aprobar el proyecto; a los días de que finalizara el Comité, recibió un correo del Subdirector Regional, sr. René Fredes Ramírez, informándole que el referido proyecto sería reasignado a otro ejecutivo; termina señalando que el día 18 de enero de 2021, se le notifica su desvinculación por la causal de necesidades de la empresa.

Que, analizados los inacabables hechos propuestos como base de vulneración de derechos fundamentales que denuncia, y teniendo por ciertos los mismos, para el solo efecto del análisis de mérito de los sucesos referidos, este juez no logra observar que el extenso relato de situaciones que contiene la demanda, mismas que en esencia fueron reconocidas en la contestación a la demanda, constituyan o puedan constituir las vulneraciones alegadas, siendo posible observar de los mismos el desarrollo de una relación de trabajo en que tanto la demandante como el jefe regional de la Corporación demandada ejercen sus funciones y labores propias, produciéndose las naturales diferencias que pueden surgir en una relación de trabajo y las obvias dificultades, desavenencias y otros que ocurren o pueden ocurrir en el transcurso de la misma, pudiendo llegar a constituir algunos de los hechos relatados faltas administrativas u otras falencias del jefe regional de la corporación demandada, pero no se observa que las mismas constituyen vulneración a garantías fundamentales de la trabajadora compareciente a este juicio.

En efecto, el ejercicio de las atribuciones y potestades del director regional Sr Villanueva, como jefe regional del servicio, concretado en pedir explicaciones, aclaraciones o hacer recomendaciones técnicas o pedir aprobación o rechazo respecto a determinados proyectos, o enviar comentarios preguntas o informaciones a su equipo de trabajo, parece estar en el ámbito del ejercicio de sus potestades y la ejecución propia de su cargo. Al respecto, doña CATHERINE RIVERA OLIVARES, Ingeniero Comercial y ejecutiva técnica Corfo Tarapacá, testigo de la actora, depuso, en relación a lo comentado, que los ejecutivos técnicos tienen supervisión directa del subdirector y agregó que la evaluación de los proyectos la hacen los ejecutivos, peor que éstos hacen una sugerencia y el comité respectivo aprueba o rechaza la propuesta o la mejoran, oportunidad en que los directores votan, emitiendo su participación por la región; destacó que el director regional, en una oportunidad, en vez de apoyar un



proyecto dijo que quería rechazarlo, dando fundamentos que no tenían que ver con la evaluación técnica que había hecho el ejecutivo, y en el ranking aquel estaba bien para ser aprobado, situación que al final ocurrió porque era un buen proyecto, agregando que estas cosas no debieran pasar porque lo que se realiza es un trabajo en equipo, agregando que este tipo de situaciones le paso a la actora y a otros ejecutivos de Corfo. Reafirmó que los Ejecutivos técnicos, como lo era la actora, recomiendan aprobar o rechazar proyectos a los respectivos comités y ello se somete a votación allí, es un equipo el que presenta el proyecto a comité y se puede aprobar o rechazar o puede haber un proyecto que se puede mejorar. Al respecto, esta declaración aparece como decidora para este juzgador, respecto a lo sostenido precedentemente, en cuanto a que lo que relata la testigo es propio de opiniones respecto a lo que debiera realizar una jefatura en el devenir de la relación de trabajo, señalando al efecto que *estas cosas no debieran pasar*, al referirse al rechazo que planteó el director regional frente a un determinado proyecto, destacando, además, que las ejecutivas técnicas que trabajan en Corfo recomiendan aprobar o rechazar proyectos de acuerdo a sus conclusiones técnicas. Ahora bien, volviendo a lo que se analiza, ratifica este juez el hecho de que la decisión del Director de apoyar o rechazar un proyecto que presenta, en este caso, la actora, no puede concluir, a lo menos en la forma en que se plantea en la demanda, en una afectación de derechos fundamentales de aquella. Tampoco lo son las demás comunicaciones e informaciones entregadas por el director a los miembros de la dirección regional, y que han sido señaladas precedentemente, por ser propias de su ámbito de acción como jefe de servicio, sin que se observe como aquellas pudieran afectar los derechos a la libertad de opinión y de trabajo y su libre elección, indemnidad laboral y garantía de no discriminación.

De otra parte, la afirmación contenida en la demanda, respecto de que la demandante recibió presiones del director respecto de determinado proyectos, no fue respaldada por medio de convicción alguno, por lo que se descarta el suceso planteado.

De otro lado, argumenta la actora haber sido objeto de discriminación laboral producto del hecho, ya mencionado, de no suscribir, en agosto de 2019, una declaración pública emitida por 13 de los 16 funcionarios de Corfo Tarapacá, apoyando la gestión del Director Regional, mismo del que da cuenta Copia de correo electrónico de fecha 20 de Agosto de 2019, de René Fredes Ramírez y declaración



pública de fecha 16 de Agosto de 2019 por parte de funcionarios de Corfo Tarapacá, al respecto no se observa cómo es posible aterrizar esta discriminación que alega en hechos concretos, salvo por el término de la relación laboral que, evidentemente, puede ser ligada a cualquier suceso negativo ocurrido durante la relación de trabajo, no siendo posible a este juzgador conectar el referido hecho, acontecido en agosto de 2019 y el despido de la demandante ocurrido en enero de 2021, al no existir antecedentes o indicios suficientes en este juicio que puedan llevar a la conclusión que el despido estuvo motivado por la no firma de la referida declaración.

Agrega que su despido, de fecha 07 de Enero de 2021, constituye un acto de discriminación en razón de carecer de parentesco con el Director Regional de Corfo Tarapacá, ello por cuanto éste contrató, con fecha 01 de Septiembre de 2019, a la señora Karen Elizabeth Lagos Talvac, ingeniero en informática y control de gestión, como “ejecutiva técnica”, asignándosele grado 6, calidad jurídica de planta (suplencia), sin ningún concurso ni filtro previo, constando que se trataba de la cuñada de aquél, alegación que este sentenciador rechaza, pues, no observa cómo se produce la discriminación o trato diferenciado alegado, basado en el hecho propuesto, esto es, carecer de vínculo de parentesco la demandante con el director del servicio público demandado, ya que basa la misma en el hecho de haber concedido una suplencia como ejecutiva técnica a una cuñada de aquél, en septiembre de 2019, y no se comprende cómo se produjo la discriminación alegada relacionándola con su despido de enero de 2021, ya que no existe concordancia temporal entre uno y otro hecho, ni tampoco se da la calidad jurídica en que se ejercieron ambos puestos, titular y suplencia, ni que una haya sido una contratada para reemplazar a la otra, por lo que se concluye la inexistencia de la discriminación alegada en este punto.

Alega también discriminación por su opinión política, ya que desde que don Cesar Villanueva Vega asumió en el cargo, en su calidad de Director Regional de Corfo Tarapacá, en Junio de 2018, la dotación de funcionarios Corfo en la región habría ido en aumento y las contrataciones han estado dirigidas a personas del sector al que se denomina de “derecha”, pues, el Director Regional de Corfo Tarapacá sería de aquella afinidad política, dando diversos ejemplos de personal contratado perteneciente a dicha tendencia política, afirmando que si la denunciada debía reducir personal en la región de Tarapacá por razones “presupuestarias”, como lo expuso en



la carta aviso de despido, entonces la medida que correspondía aplicar, sostiene, era precisamente reducir personal transitorio y sin carrera funcionaria, en vez de desvincular a una funcionaria con años de trayectoria, como ella, por lo que, siendo la demandante de opinión política opuesta a su ideología, afirma que era a quien había que desvincular, sin importar si la mantención de los trabajadores transitorios referidos generaban mayor gasto mensual, privilegiando la opinión política cercana al director, lo que alteraría la igualdad de trato en el empleo. Al efecto la demandante sólo aportó Resolución N° 03, de fecha 02 de Septiembre de 2021, emitida por Servel, que contiene nómina de los candidatos a Consejeros Regional de la Región de Tarapacá, dentro de la cual se encuentra Carlos Mauricio Schmidt Silva, abogado de Corfo, quien iría por una lista de derecha, no contándose con otros medios de prueba que se hayan rendido y en lo fundamental, no se aportó probanza alguna tendiente a acreditar la posición política de la actora y que ésta misma estuviera, además, en conocimiento de su jefatura y que, como consecuencia de ello, se haya decidido poner término a su contrato de trabajo, razón por lo que corresponde que esta propuesta fáctica sea desestimada por no haberse acreditado el fundamento fáctico de la misma.

Con lo concluido precedentemente, descarta este juez la probanza rendida por la accionada, consistente en certificados emitidos por el Servicio Electoral de Chile, Servel, respecto de doña Karen Lagos, Talvac, don Hugo Rodríguez Álvarez, doña Jocelyn Bugueño Díaz, doña Susana Alvarado Pérez, don Alexis Inarejo Rivera, quienes aparecen sin filiación política, ello en razón de lo ya razonado ut supra.

Alegó, además, la actora discriminación en razón de su formación profesional, pues la denunciada en estos autos habría reconocido que como consecuencia de su formación profesional, unido a la supuesta “ausencia de cupos”, determinó, entre otros supuestos factores, su desvinculación, contraviniendo el inciso 4° del artículo 2 del Código del Trabajo al excluirla de su fuente laboral basado en motivos de “formación profesional”, al respecto igualmente rechazará este juez dicho planteamiento como motivo suficiente para configurar un acto de discriminación, al entender que lo comunicado en la carta aviso de despido, si bien alude a su formación profesional como sustento del despido, lo hace junto al relato de otros sucesos o fundamentos, uno de los cuales refiere la ausencia de un cargo para la trabajadora según su especialidad y que impidieron trasladarla a otro puesto, por lo que lo



señalado no logra configurar la figura de discriminación descrita en la norma referida, misma que tiende a proteger a los trabajadores de un trato diferenciado basado en su sexo, religión, raza, opinión política u otro motivo similar, cuyo no es el caso planteado.

También sostuvo discriminación por exigir el cumplimiento de normas de probidad y normativa Corfo, pues al Director Regional Corfo Tarapacá le incomodaría que reiteradamente le contravirtiera los aspectos técnicos de su trabajo y evaluación en los proyectos y gestiones en los que éste demostraba un interés, al respecto, igualmente se descartará la existencia de discriminación alegada de acuerdo a los fundamentos ya señalados en párrafos anteriores para efectos de descartar vulneración de derechos, en lo que este juez observa como el desarrollo de una relación de trabajo, en que se ejerció funciones y potestades propias por cada uno de los involucrados, no observándose la discriminación alegada, es decir, haber sido tratada de modo diferente al resto, en hechos concretos.

Por último, alega discriminación en razón de haber sido presentada y citada como testigo en una causa laboral RIT T-253-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, caratulada “BARRERA con CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN”, seguida en contra de Corfo, de lo que da cuenta Acta de audiencia preparatoria de la mencionada causa y carta certificada enviada a la demandante por este Juzgado citándola a comparecer a audiencia de juicio en calidad de testigo, argumentando que siendo una de las pocas ejecutivas técnicas que estuvo dispuesta a declarar en el juicio laboral que su ex colega srta. Carolina Barrera Díaz siguió en contra de Corfo Tarapacá, esto condujo a ser discriminada y a su desvinculación. Alega, además, violación de la garantía de indemnidad laboral, basado en el mismo proceso judicial, que comenzó con fecha 27 de Diciembre de 2019. Al respecto, cabe indicar, que no es posible contar en este proceso con algún antecedente cierto de que el despido tenga su fuente o causa en que la demandante haya sido ofrecido como testigo en la causa aludida, especialmente si aquella fue despedida casi un año después del referido suceso y por cuanto la mencionada tampoco testificó en juicio, por lo que es difícil elucubrar que el referido despido se haya producido como represalia, especialmente si se ignora el contenido del testimonio que iba a prestar la actora, pues ésta no declaró. Por ello, atendido la falta de antecedentes o indicios que conduzcan a la conclusión de que el despido se produjo exclusivamente por haber



sido ofrecida la actora como testigo en la causa indicada o que la misma situación habría llevado a la discriminación de la referida, se descarta la referida propuesta.

A todo lo reflexionado, se agrega el hecho de que la competencia de este tribunal se encuentra otorgada por la propuesta fáctica de las partes, en este caso, contenido en el petitorio de la demanda, por tanto, el análisis de este juez sólo puede centrarse en determinar la existencia de vulneración de garantías y derechos fundamentales ocurridos con ocasión del despido de la trabajadora demandante.

En virtud de lo señalado, aparece que no pueden ser objeto válido de análisis en esta sentencia, los hechos relatados por la actora en su demanda relativas a conductas todas ellas ocurridas durante la relación laboral, por lo que las propuestas fácticas de la actora deben ser rechazadas, además, en función a lo señalado.

Por todo lo dicho, este juez concluye que el extenso relato de hechos efectuados en la demanda no presentan la entidad suficiente como para configurar las vulneraciones a los derechos fundamentales que denuncia como atropellados, pues, los sucesos referidos parecen responder a la dinámica de una relación de trabajo, no observándose en este proceso algo que pudiera mermar de forma seria las garantías básicas de la trabajadora denunciante y respecto de la discriminación alegada y atropello a la garantía de indemnidad, aparecen no suficientemente acreditadas en este pleito.

Por lo anterior, desechándose las conductas señaladas como constitutivas de atentados a la libertad de opinión y de trabajo y su libre elección, indemnidad laboral y garantía de no discriminación que se denuncia, se desechará la existencia de vulneración de derechos fundamentales impetrada.

Como reflexión final aparece que todo lo que sucede durante una relación de trabajo efectivamente puede determinar o condicionar el fin de la misma, por ello lo que el legislador laboral pretendió resguardar con la acción de tutela de derechos fundamentales es que con ocasión del despido no se transgredan garantías básicas, como ser despedido por la orientación sexual de una persona o por su afiliación política, reservando otras acciones de resguardo de derechos esenciales producidas durante la relación de trabajo, y otorgando un plazo acotado para reclamar a su respecto, 60 días hábiles, distinción que se hace presente porque como surge del presente caso, cualquier situación surgida durante la relación laboral puede ser esgrimida, individual y colectivamente, como motivo de despido con violación a



derechos esenciales, como ocurre en este caso, en que se expusieron un sinnúmero de situaciones particulares en la demanda como motivo del despido y de la vulneración que alega, no logrando con ello otorgar claridad, ni menos certeza, de que alguna de ellas haya sido precisamente el motivo de la desvinculación y del atropello de los derechos que alega.

QUINTO: Que, respecto al despido de que fue sujeto la trabajadora demandante, y la justificación del mismo, aparece que la demandada arguye la aplicación de la causal establecida en el artículo del art. 161 del Código del Trabajo, según da cuenta carta de despido de fecha 07 de Enero de 2021, señalando como fundamento fáctico de ello, indicada en la misiva respectiva, en que *“En lo que dice relación con el deber de efectuar las mejoras necesarias en la gestión regional, se ha evidenciado la urgente necesidad de separar las funciones de tesorería y contabilidad, lo que en la actualidad ha sido calificado como “catastrófico” en el análisis de riesgo institucional; ya que actualmente se encuentran centralizadas en un mismo trabajador, lo que requiere impulsar la contratación de personal con un perfil de “contador regional”. Lo anterior, con el objeto de materializar el principio de oposición de funciones, la adecuación de la gestión interna para prever errores en la ejecución de los recursos, mejorar los controles internos y minimizar los niveles de riesgo en las condiciones normales de operación en la Dirección Regional de Tarapacá. Junto con ello, como es sabido, con ocasión del fuerte impacto que la emergencia sanitaria tanto a nivel nacional, como mundial, está produciendo, en distintos aspectos de la sociedad, particularmente en el ámbito económico está generando fuertes ajustes que también han afectado insoslayablemente a los Servicios Públicos, debiendo aplicarse en ellos una fuerte racionalización de recursos para el año entrante, racionalización de las que no resulta ajena Corfo, ni por cierto la dirección Regional en la que usted se desempeña. Es así como la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, establece, en términos generales, ajustes importantes que afectan a diversos Servicios, entre los cuales se cuenta Corfo, y sus Comités, el que presenta un presupuesto menor al del año previo, con una rebaja considerable que afectará una serie de programas, y lo que es aún más delicado, con consecuencias en el personal que se desempeña en la Corporación, y particularmente en sus Comités; de tal modo, que Corfo ya se ha visto en la necesidad ineludible de poner término a algunos de*



los Comités; y, en particular, en el caso que nos concita, reducir el número de funcionarios de la Corporación, respecto del cual se ha resuelto la desvinculación de trabajadoras y trabajadores, entre los cuales se encuentra incluida usted”. “En efecto, atendida la reducción presupuestaria, la Corporación se ha visto obligada a reorganizar, reestructurar y racionalizar la estructura de programas e instrumentos institucionales; así como también asumir y reestructurar programas e instrumentos que siendo desarrollados inicialmente por Comités deberán ser impulsados a través de la Corporación, lo que requiere inevitablemente efectuar el ejercicio de priorizar las labores de trabajadores y trabajadoras de la Corporación y sus Comités, para enfocarse en la ejecución de programas e instrumentos que ya se encuentran diseñados; y particularmente en el caso de la Dirección Regional de Tarapacá, generar la administración de fondos extrapresupuestarios, vía proyectos ya formalizados, junto con la proyección estimada para el año 2021. La reorganización, reestructuración y racionalización antes expuesta, así como el deber de efectuar mejoras necesarias en la gestión regional, antes descrita, han determinado atendido las nuevas prioridades impulsadas por la disminución presupuestaria, contar con un profesional experto en área de contabilidad; y que las labores y funciones atribuidas a los Ejecutivos Técnicos de la Dirección Regional de Tarapacá, sean desarrolladas por un menor número de funcionarias y funcionarios, de modo de no generar un cupo adicional de dotación de profesionales en la Dirección Regional; por lo que las funciones que usted desempeñaba, en su calidad de Ejecutiva Técnica, serán redistribuidas y asimiladas entre el resto de los ejecutivos de la Dirección Regional”. Por otra parte, si bien es cierto se efectuaron los esfuerzos, y debidos estudios, para ser trasladada a desempeñar otras funciones en la Dirección Regional, lo anterior no fue posible, atendida su formación profesional, y la inexistencia de cupos en otras áreas de Corfo, lo cual cierra cualquier posibilidad de continuidad en el Servicio. En consecuencia, y atendido los motivos expuestos, y considerando la imposibilidad de que sea empleada en otras funciones similares a las hoy ejecutadas por usted, es que se ha tomado la difícil decisión de prescindir de sus servicios, sin antes agradecerle por su compromiso, seriedad y dedicación manifestada en las labores encomendadas durante su desempeño en la Corporación”.

Al análisis de los mismos, aparecen estos fundamentos transcritos como genéricos e imprecisos, pues no contienen, y por tanto no informan, con claridad y precisión los



hechos que sirven de sustento al despido del trabajador demandante. En efecto, se le comunica al trabajador que su despido se debe a que *una reorganización, reestructuración y racionalización, para efectuar mejoras en la gestión regional, lo que habría determinado, atendido las nuevas prioridades impulsadas por la disminución presupuestaria, contar con un profesional experto en área de contabilidad y que las labores y funciones atribuidas a los Ejecutivos Técnicos de la Dirección Regional de Tarapacá, sean desarrolladas por un menor número de funcionarias y funcionarios*, no explicando de modo alguno las circunstancias específicas que obligarían a prescindir de los servicios de la actora en el caso en específico. Por ello este tribunal entiende que los hechos referidos por la demandada como fundamento de la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del ramo, no cumplen con los estándares fijados por la doctrina y jurisprudencia, en cuanto éstas han señalado que los hechos sustentos de esta causal se caracterizan por ser objetivos, graves y permanentes.

En efecto no explica cuántos despidos debieron efectuarse en la corporación demandada y a qué cargos correspondía los mismos, es más, sólo explica que debe contratar un nuevo profesional atendida las falencias que habría detectado al interior de la corporación, no entregando argumentos entendibles de por qué llega a prescindir del cargo de ejecutiva técnica y específicamente el cargo de la actora, teniendo en cuenta su expertís y años de servicios en el servicio demandado.

De otra lado, y aumentando más la confusión, llamado el representante de la corporación a estrados, Director regional Sr. Villanueva, este expresó que la actora fue alejada en el cargo por ser la peor evaluada, situación que, primero, no está contenida en la carta y, segundo, no tiene relación con la causal de despido invocado. Se agrega a lo señalado la situación relativa a que, según la declaración del subdirector del servicio, Sr. Fredes, encargado de evaluar a las ejecutivas técnicas de Corfo, aquél sostuvo que no habría participado en la desvinculación de la actora y que no habría evaluado a la misma para tales efectos.

A su vez, y siguiendo con la declaración del Director regional aludido, este sostuvo que consultó a nivel central la cuestión del despido de la actora, y la solución sería la desvinculación de un ejecutivo técnico, para contratar a un contador auditor, ya que sostuvo que la corporación terminó manejando mucho dinero, pues éste aumentó muchas veces, situación última que tampoco se aviene con lo expresado en la misiva



de despido que sostiene precisamente lo contrario, esto es, la disminución presupuestaria y baja de recursos.

Por lo dicho, al no haber comunicado debidamente al trabajador, de acuerdo a la obligación que le impone el artículo 162 del Código del Trabajo, los hechos en que se funda la causal invocada por la empresa, no pudiendo acreditar la veracidad de los mismos, ni permitiendo al trabajador desdecirlos, impidiendo con ello un adecuado derecho a defensa, concluyendo, por tanto, que no es posible observar en los fundamentos del despido comunicados al trabajador la existencia de hechos objetivos, graves y permanentes, que lleven necesariamente a la separación del trabajador, se tendrá como improcedente el despido del trabajador demandante, de acuerdo a la causal invocada, razón por la que se accederá al recargo solicitado y la devolución de lo descontado por aporte patronal al seguro de cesantía.

Que, en cuanto al cobro del aporte al seguro de cesantía descontado por la Corporación demandada de las indemnizaciones que debía pagar a la trabajadora demandante, habiendo concluido este tribunal como improcedente el despido de la misma, en relación a la causal invocada del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, cabe entender con ello que no se satisface la condición establecida por el inciso segundo del artículo 13 de la ley 19.728, en cuanto a que se haya invocado correctamente la causal conocida como necesidades de la empresa, pues no aparece razonable otorgarle efectos a una causal que ha sido declarada como improcedente por este tribunal.

Para el cálculo del recargo se tendrá presente el finiquito aportado a este juicio que da cuenta del pago de una indemnización por años de servicios por la suma de \$28.779.630.- y de lo descontado a título de descuento por aporte del seguro de cesantía.

Al efecto, descarta este juez la información contenida en decreto Afecto N° 83, de 31 de diciembre de 2020, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en virtud del cual se ordenó el traspaso de trabajadores a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en calidad de contrata, Decreto Exento N° 119, de 31 de diciembre de 2020 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en que se ordenó el traspaso de 18 trabajadores sujetos a Código del Trabajo de Corfo, al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a partir del 1 de enero de 2021, en calidad de contrata, Copia de cartas de despido de 12 de empleados de los Comités de Corfo: Comité



Solar, de Transformación Digital, Comité Indígena, de fechas 24 septiembre 2020, 25 septiembre 2020, 29 diciembre de 2020 y otras del 1 de enero de 2021, todas por termino de contrato de trabajo por necesidades de la empresa, por no tener relación ni directa ni indirecta con el despido que se analiza, al tratarse de traspasos y de despidos ocurridos con anterioridad al de la actora y por otros motivos, según aparece en las cartas de exoneración respectivas.

SEXTO: Que, para los efectos de fijar el monto de la remuneración mensual percibida por el trabajador demandante, este tribunal fijará como remuneración mensual aquella que surge de las liquidaciones de sueldo aportadas al pleito, de las que se obtiene una suma promedio de los últimos tres meses trabajados de \$3.440.370.- (tres millones cuatrocientos cuarenta mil trescientos setenta pesos).

SEPTIMO: Que, en cuanto a la nulidad de despido solicitada por la demandante, basado en el no pago íntegro de las cotizaciones correspondientes al mes de junio de 2010, suceso que fue desdicho por la demandada quien afirmó que las cotizaciones previsionales correspondientes a AFP Capital, Isapre Banmédica y Achs, se encontraban pagadas íntegramente, haciendo presente que en el año 2010 la ex funcionaria se encontraba con licencia médica por accidente laboral desde el 9 de abril de 2020 hasta el 4 de junio de 2010, siendo pagadas dichas cotizaciones, conforme certificado previred que acompaña y certificado emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, de fecha 16 de junio de 2010, en AFP Capital -aportes previsionales y seguro de desempleo- y en Isapre Banmédica, fueron enterados por la Asociación Chilena de Seguridad, y las demás cotizaciones que correspondían durante el período de licencia, fueron enteradas por CORFO.

Al efecto, del mérito de los certificados emitido por Previred, de fecha 04 de Enero de 2021, Certificado histórico de cotizaciones previsionales emitido por Afp Cuprum, emitido con fecha 14 de Septiembre de 2021, por el período correspondiente a Mayo de 2010, consta que la demandada no pagó las cotizaciones previsionales en Afp Capital, pues sólo aparece enterada la suma \$25.210.-, lo que no se corresponde con la remuneración imponible, ni tampoco aquellas correspondientes a salud de Isapre Banmédica.



Se suma a lo anterior el hecho de que solicitados exhibir los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales de la demandante correspondiente a Afp Capital e Isapre Banmédica del período junio 2010, estos no fueron aportados, por lo que se hace efectivo el apercibimiento de tener por efectivo lo expuesto en la demanda en relación al no pago íntegro de cotizaciones del referido mes de junio de 2010.

Por todo lo anterior, se tiene como efectivo el no pago íntegro de las cotizaciones previsionales de la actora, de lo que resulta el incumplimiento de las obligaciones que el artículo 58 del Código del Trabajo le impone al empleador, y que la legislación previsional pertinente le imponía, en cuanto a la retención, declaración y pago íntegro de las cotizaciones previsionales respectivas.

Se desecha la información contenida en Certificado de licencia médica de la actora, por accidente del trabajo, que da testimonio del período de reposo de esta, desde el 9 de abril de 2010, al 4 de junio del mismo año y certificado emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, de fecha 16 de junio de 2010, pues, lo discutido en autos se refiere al pago íntegro de cotizaciones del periodo junio de 2010, refiriendo los certificados aludidos a la situación ocurrida hasta el 4 de junio de 2010.

De igual forma descarta la explicación formulada por don Guillermo López Pavez, funcionario de CORFO, encargado de remuneraciones, quien señaló que la actora tuvo accidente de trayecto, estando con licencia entre el 9 abril al 4 junio de 2010, y que le descontaron los días de licencia y de accidentes del trabajo, 30 días en junio y otros en julio, pues, en su oportunidad no sabían que estaba con licencia la actora y le pagaron cotización en abril y mayo, por eso compensó en junio julio, por eso no aparecen cotizaciones solucionadas en dicho mes, pues no se pagaron por lo dicho, ya que la Asociación Chilena de Seguridad también lo habría hecho, a su vez, en abril y mayo. Al respecto, no teniendo apoyo fáctico ni normativo la referida compensación realizada por el funcionario, como se dijo, se rechaza esta explicación.

☐ Por lo antedicho, necesario resulta acoger la demanda en este ítem, y se declara que el despido de que fuera objeto la trabajadora accionante no produjo el efecto de poner término a su contrato de trabajo, para el sólo efecto remuneracional, en razón de no haberse satisfecho las prestaciones de la seguridad social referidas, condenándose en consecuencia a la demandada a pagar las remuneraciones que se devengaron a contar



de la fecha del despido y hasta la época en que se produzca la convalidación del mismo.

NOVENO: Que, respecto de la excepción de compensación opuesta, basado en el aporte de la corporación demandada al seguro de cesantía de la actora por la suma de \$9.260.934.-, correspondientes a las cotizaciones sobre las remuneraciones devengadas durante el periodo que prestó servicios la actora, por lo que conforme lo prescrito en el artículo 13 de la Ley N° 19.728 sobre Seguro de Desempleo, el Monto Aportado por el Empleador, corresponde deducirlo de la indemnización por años de servicios, cuando el contrato termina por la causal necesidades de la empresa, situación que ocurriría en los presentes autos, corresponde a este juez rechazar la misma, pues, conforme a lo prescrito en el artículo 1.567 N° 5 del Código Civil, las obligaciones se extinguen en todo o parte por la compensación, mientras que el artículo 1.655 del mismo código establece que cuando dos o más personas son deudoras una de otra, puede operar entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, situación base que no se observa en el caso de autos, pues, ni la Corporación accionada es deudora de la suma indicada en relación a la actora, ni ésta es deudora de la misma en relación a aquella, por lo que sólo cabe el rechazo de la excepción planteada sin perjuicio de lo resuelto en la consideración quinta.

DECIMO: Que, se desestima contenido de Resolución Exenta N° 1937 de 2016, que contiene el Código de Ética de Corfo, por entender que no tiene relación alguna con lo discutido en este pleito.

Igualmente se desestima la prueba consistente en Resolución (A) N° 277, de 2011, que fija las Bases Administrativas Generales para todos los Instrumentos o Líneas de Financiamiento del Comité Innova Chile, Resolución (E) N° 1.780, de 2011, que ejecuta Acuerdo de Consejo de Corfo N° 2.694, de 2011, el cual dispone la delegación de facultades en Directores Regionales sobre proyectos del Comité Innova Chile, Bases de Postulación al Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas, Proceso de Postulación año 2020, Resolución Exenta N° 2334/2020, de la Intendencia Regional de Tarapacá, que aprueba las Bases para la Postulación al DFL 3/2001 (DFL 15), para el año 2021, Resolución (E) N° 19, de fecha 18 de enero de 2019, que aprueba el Procedimiento de Prevención, Denuncia e Investigación sobre



Maltrato, Acoso Laboral y Sexual para Corto y sus Comités; Resolución Exenta N°108, de 01 de abril de 2019, que designa receptores de denuncias de maltrato, acoso laboral y sexual, Ordinario N° 12.624, de la Contraloría General de la República, de fecha 12 de noviembre de 2020, en virtud del cual el Ente Contralor, rechaza la denuncia sobre eventual falta a la probidad administrativa e inhabilidad de ingreso a la Administración de personal de la Dirección Regional de Corfo Tarapacá, en relación a la contratación de doña Karen Lagos Talvac, y de don Alexis Inarejo Rivera, Certificado N° 155/2019, Sesión VIII Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, de fecha 25 de abril de 2019 se aprobaron recursos para el proyecto denominado “Centro de Economía Circular”, a Corfo Tarapacá; certificado N° 367/2019, Sesión XX Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, de fecha 28 de octubre de 2019 se aprobaron recursos FIC a Corfo Tarapacá; Certificado N° 073/2020, Sesión V Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, de fecha 17 de marzo de 2020 se aprobó programa para el fomento productivo, BIP 40020053-0; Certificado N° 151/2020, Sesión VIII Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, de fecha 22 de abril de 2020 se aprobó programa para la reactivación económica por impactos del Covid19, BIP 40023020-0 a Corfo Tarapacá; Certificado N° 704/2020, Sesión XXIV Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, de fecha 29 de diciembre de 2020 se aprobó programa para la reactivación del Puerto de Iquique y su cadena logística, BIP 40027534-0, a Corfo Tarapacá; Oficio N° 493, de 20 de agosto de 2021, de la Dirección Regional de Corfo Tarapacá, en virtud de la cual el Director Regional de Corfo, César Villanueva Vega, solicita a la Intendencia Regional de Tarapacá, no emitir la resolución de pago de bonificación del proyecto que individualiza, de la empresa Inversiones Inmobiliaria Norte SPA., correspondiente al llamado Concurso DFL -15, del proceso del año 2020; Ordinario N° 266, de 30 de junio de 2020 de la Tesorería General de la República, en el marco de la fiscalización del beneficio DFL N° 15; Oficio de la Dirección Regional de Corfo Tarapacá, Oficina de Partes N° 314, de 2 de junio de 2020, dirigida a Inversiones Inmobiliaria del Norte Spa, en el marco del DFL 15/81 del año 2020; Dictamen de la Contraloría General de la República Contraloría Regional de Tarapacá, de fecha 14 de diciembre de 2020, en el cual la Tesorería Regional de Tarapacá, dispuso el reintegro de la bonificación contemplada en el DFL 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, en un caso en que se requirió informe a la Dirección Regional de Tarapacá de Corfo; Copia de los



contratos de honorarios de Alexis Inarejo Rivera, Jaime Martínez Zaror, Hugo Rodríguez Álvarez, Joselyn Bugueño Díaz, y Susana Alvarado Pérez, en cada uno de los cuales se detalla el cómo han sido contratados en virtud del respectivo convenio de transferencia suscrito con el Gobierno Regional Región de Tarapacá, y la Corporación de Fomento de la Producción; Resolución 98 20 Corfo Tarapacá se aprobó convenio de traspaso de recursos para abordar impactos del covid-19; por no aportar en nada los referidos instrumentos al resuelto del presente litigio, teniendo presente que este juez ha tenido por ciertos los hechos de que dan cuenta estos instrumentos, para el ejercicio de análisis fáctico ya referido en la consideración cuarta.

También descarta el testimonio prestado por doña CAROLINA ANDREA BERNAL IRIARTE, Ingeniero Comercial y ejecutiva técnica Corfo Tarapacá, presidenta regional de la asociación de funcionarios, pues sólo sostuvo que conoce a la actora, pues fue su colega, relatando situaciones propias de la relación de trabajo y de su cargo como presidenta de la asociación, destacando de su declaración que el director regional a su llegada le habría dicho que no le gustaba como trabajaba la actora, pero que con posterioridad él le dice que aquella era una buena ejecutiva, esto fue como el año 2018 o 2019, no recuerda fecha, pero habría sido el último comentario que escuchó respecto de la demandante, entendiendo que de acuerdo a lo tenido por cierto en la consideración cuarta, esta declaración no aporta al sustento de lo discutido en juicio. Luego se contó con la declaración de RAÚL ANDRÉS GUZMÁN VIEIRA, Ingeniero Comercial y Jefe de Administración y Control Corfo Tarapacá, quien se limitó a señalar que junto a la actora detectaron anomalías de funciones y que faltaban funcionarios para que no hubiese duplicidad de funciones en un solo cargo, señalando que esto fue en el año 2019 o 2020, terminando con que se hizo concurso para contador regional y que fue contratada una persona, con posterioridad al despido, testimonio que, como se observa, no contribuye a resolver lo que este juez estimó como esencial en este litigio. De igual forma, desestima se desestima la declaración de ANDRÉS LEYTON GUERRERO, Periodista de Corfo, pues, declaró sobre los hechos tenidos por ciertos en la consideración ya referida, en específico sobre el incidente relatado en la demanda relativo a vehículo fiscal y choferes designados para ellos y muy brevemente refirió la existencia de una declaración rechazando la acusación contra el director regional y Corfo, indicando que la



contraloría descartó el hecho denunciado y que no recuerda si la actora firmó o no la declaración referida. De la misma forma y por las mismas razones, desestimo la la declaración de doña LORNA MADARIAGA VÉLIZ, Ejecutiva Dirección Regional, por referirse a la dinámica de trabajo y a cómo se aprobaban los proyectos a cargo de Corfo y de don RENÉ ALFONSO FREDES RAMÍREZ, Ingeniero Civil, subdirector de Corfo, por idénticas razones, por referir esencialmente la forma de trabajo, indicando que la actora era una instancia de recomendación de proyectos al director regional quien toma la decisión final y las lleva al comité. De la misma forma, prescindirá de la declaración de la actora doña MARIA ALEJANDRA BUSTAMANTE TAPIA, atendido el mismo fundamento expuesto, pues su declaración se refirió a la dinámica de trabajo, replicando lo señalado en su demanda respecto a los proyectos en que participó y la actuación que habría tenido el director regional de Tarapacá Sr. Cesar Villanueva en los mismos, destacando solo que reconoció que no hizo denuncia alguna por trato discriminatorio contra el director, a pesar de existir reglamento interno por maltrato y acoso en la institución demandada.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto lo establecido por los artículos 161, 162, 168, 485 y 489 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.-Se acoge la demanda subsidiaria por despido injustificado y nulidad del mismo interpuesta por doña **MARIA ALEJANDRA BUSTAMANTE TAPIA en contra de la CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN**, por lo que se le condena al pago de las siguientes prestaciones:

1.-Al pago del recargo por la improcedencia de la causal invocada contenido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, esto es el 30% sobre la indemnización por años de servicio, que corresponde en este caso, a la suma de \$8.633.889.-

2.- Al pago de lo descontado a título de descuento por aporte del seguro de cesantía por la suma de \$9.260.934.-

3.- Al pago de todas la remuneraciones devengadas y que se devenguen desde la fecha del despido hasta la convalidación del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 de Código del Trabajo.



Lo anterior con los reajustes, intereses y recargos legales dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

II.- **Se rechaza la demanda principal** por vulneración de derechos fundamentales y las demás prestaciones no acogidas en el punto anterior.

III.-Se rechaza la excepción de compensación opuesta por la demandada.

IV.-No se condena en costas a la demandada, por no resultar totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese y archívese con sus antecedentes en su oportunidad.

RIT T-168-2021

Dictada por don **FRANCISCO JAVIER VARGAS VERA**, Juez Titular de este Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique.

